

1 HECHOS**5**

1.1 EL DÍA 27 DE MARZO DE 2019 EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, IDU, EN RAZÓN A LA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA PARCIAL, SOBRE UNA ZONA DE TERRENO DE 3330.81 M2, CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 50S- 40279765, PROFIRIÓ PARA EL PAGO LA RESOLUCIÓN 1246 DEL 2019, RAD: 20193250012466, RT. 46881,5

1.2 LA RESOLUCIÓN ORDENÓ EL PAGO DE LA SUMA DE DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$2.443.648.757) MONEDA CORRIENTE, MENOS LOS DESCUENTOS QUE POR LEY SE DEBIERAN REALIZAR; ORDENÓ QUE ENVIARAN EL DINERO; EN PRIMERA INSTANCIA ENVIÓ EL TÍTULO JUDICIAL A ÓRDENES DEL JUZGADO 12 C. DEL CTO, A FIN DE DAR TRÁMITE FINANCIERO A UNA DEMANDA INSCRITA DE VISOCOL CONTRA CONSTRUCTORA Y PROMOTORA BCP LTDA. EN LIQUIDACIÓN, ESTO, DESDE EL 15 DE MARZO DEL AÑO 2002, Y QUE SI NO ERA COBRADO DIEZ DÍAS DESPUÉS, EL JUZGADO LO DEBERÍA REGRESAR A LA ENTIDAD BANCARIA. (ART. 3º DE LA RESOLUCIÓN). EL DÍA 13 DE ENERO DE 2021, EL JUZGADO 12 C. DEL CTO, ORDENÓ CONVERTIR TODO EL DINERO AL BANCO AGRARIO, POR CUANTO INVERSORA Y PROMOTORA GERONA NO ERA PARTE ALGUNA EL PROCESO REFERIDO.

6

1.3 EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, LA EMPRESA BENEFICIARIA DEL TÍTULO, AQUÍ ACCIONANTE, A TRAVÉS DE SU APODERADA SE REMITIÓ AL BANCO AGRARIO CON EL FIN DE QUE ÉSTE REALIZARA EL DESEMBOLSO, EL BANCO LE INFORMÓ QUE EL TÍTULO YA HABÍA SIDO PAGADO A UN SUJETO LLAMADO VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO C.C. 4.318.158. QUE HABÍA SIDO PAGADO POR ORDEN DEL IDU. PRESENTAMOS EL RECLAMO EN EL IDU, EL MISMO DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021. RADICADO Nº 20215261582152.

6

1.4 EL DÍA, 13 DE OCTUBRE DE 2021, PRESENTAMOS UN NUEVO DERECHO DE PETICIÓN A NOMBRE DEL DIRECTOR DEL IDU DOCTOR DIEGO SÁNCHEZ FONSECA. SOLICITANDO EL PAGO.

6

1.5 EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2021, MARÍA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS, EN ASOCIO CON MARCELA ZULUAGA FRANCO, DIO CONTESTACIÓN A LOS DOS DERECHOS DE PETICIÓN CON UNA ABSURDA JUSTIFICACIÓN Y PROFIRIÓ QUE EL DINERO LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, PRESUNTO DELINCUENTE.

6

1.6 JUSTIFICARON EL PAGO CON UNA SUPUESTA ACTA DE CONCILIACIÓN FIRMADA EN EL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAMIENTO SOLUCIÓN INTEGRAL DE LA “FUNDACIÓN DERECHO Y EQUIDAD”, EL ACTA APARECE FIRMADA ENTRE EL SEÑOR VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, Y EL DOCTOR CARLOS ADNER VIVEROS DIAZ, SUPUESTAMENTE APODERADO DE INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, POR PODER OTORGADO POR EL SEÑOR MIGUEL ARANGO DE FEX, REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA. EN MANERA ALGUNA EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZÓ EL HECHO, NI MIEMBRO ALGUNO DE LA COMPAÑÍA FIRMÓ TAL PODER, NI CONOCEMOS AL SUJETO.

7

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. Sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 1.7 | LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE ANEXÓ LA FUNCIONARIA FUERON: UNA FOTOCOPIA DEL ACTA DE CONCILIACIÓN SIN ANEXO ALGUNO Y COPIA DE UN MEMORANDO EN EL QUE MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS IDU, ORDENÓ A DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO, SUBDIRECTORA TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO, IDU, HACER EL CHEQUE A NOMBRE DE VICTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, POR CUANTO UNA MUJER LLAMADA DORYS EUGENIA ÁLVAREZ GARZÓN, LO SOLICITÓ. | 7 |
| 1.8 | EL IDU EJERCIÓ INSTRUCCIÓN, AL HACER EFECTIVO EL PAGO CON LA MERA PRESENTACIÓN DEL “ACTA VIRTUAL DE CONCILIACIÓN”, OMITIÓ ATENDER LA LEY QUE REGULA LOS EFECTOS DEL ACUERDO CONCILIATORIO, CUYA ACTA ÚNICAMENTE PRESTA MÉRITO EJECUTIVO. (ARTÍCULO 66 LEY 446 DE 1998). Y BIEN ES SABIDO QUE UN PROCESO EJECUTIVO SE ADELANTA EN JURISDICCIÓN CIVIL, ANTE UN JUEZ Y NO ES UN DOCUMENTO INTERCAMBIABLE ANTE UNA PAGADOR. | 7 |
| 1.9 | EL IDU OMITIÓ EL DEBER DE ENTREGAR LA TOTALIDAD DEL PROCESO A LA BENEFICIARIA POR EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA | 7 |
| 1.10 | LOS HECHOS PRESENTADOS MUESTRAN LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, PERTURBACIÓN A LA PUBLICIDAD, Y DEFENSA | 13 |
| 1.11 | INVERSORA Y PROMOTORA GERONA EN LIQUIDACIÓN, NO RECIBIÓ DE PARTE DEL IDU, DE MANERA ÍNTEGRA, LA DOCUMENTAL QUE DEBE CONTENER UN PROCESO DE EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA | 13 |

2 FUNDAMENTOS DE DERECHO **14**

| | | |
|------------|---|-----------|
| 2.1 | ARTÍCULO 86 DE LA CARTA CONSTITUCIONAL DE 1991 | 14 |
| 2.2 | DECRETO 2591 DE 1991, LEY 1755 DE 2015 | 14 |
| 2.3 | EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD ES GARANTÍA MÍNIMA DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO ART. 29 CN. | 14 |
| 2.4 | SENTENCIA T-206/18. ACCIÓN DE TUTELA EN MATERIA DE DERECHO DE PETICIÓN-PROCEDENCIA DE MANERA DIRECTA POR SER DERECHO FUNDAMENTAL DE APLICACIÓN INMEDIATA | 14 |

3 PRUEBAS Y ANEXOS **15**

| | | |
|------------|---|-----------|
| 3.1 | EL EXPEDIENTE ELABORADO POR LA SUSCRITA APODERADA QUE DA CUENTA DE LOS HECHOS VIOLADORES AL DEBIDO PROCESO POR VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. ANEXO EXPEDIENTE CON 267 FOLIOS. | 15 |
| 3.2 | LAS DECLARACIONES DE LAS FUNCIONARIAS ROSITA ESTHER BARRIOS, MARIA DEL PILAR HURTADO GRAJALES, DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO SUBDIRECTORA TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO RESPONSABLES Y REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, REALIZADAS A TRAVÉS DE SUS PROPIOS ESCRITOS. (FOLIOS, 194, 221-222, DEL EXPEDIENTE ELABORADO POR LA APODERADA ACCIONANTE) | 15 |

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. Sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

3.3 LAS SENDAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA SUSCRITA APODERADA ACCIONANTE (FOLIOS, 137, 230 245 DEL EXPEDIENTE ELABORADO POR LA APODERADA ACCIONANTE). 15

3.4 DECLARACIÓN JURAMENTADA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA ACCIONANTE, QUIENES DECLARAN QUE NO TIENEN CONOCIMIENTO DE LAS JUSTIFICACIONES QUE ENTREGARON LAS FUNCIONARIAS PARA ENTREGAR A UN PRESUNTO DELINCUENTE LA TOTALIDAD DEL DINERO ORDENADO POR LA RESOLUCIÓN : 1246 DEL 27 DE MARZO DE 2019 RAD. 20193250012466 RT. 46881 A (FOLIOS, 196-197 DEL EXPEDIENTE ELABORADO POR LA APODERADA ACCIONANTE). 15

4 ANEXOS 16

4.1 EL PRESENTE ESCRITO DE TUTELA 16

4.2 PODER GENERAL INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN CON VIGENCIA 16

5 SOLICITUDES 16

5.1 ORDENAR AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, QUE A TRAVÉS, DE SU DIRECTOR DIEGO SÁNCHEZ FONSECA, REALICE TODAS LAS ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS Y ENTREGUE DE MANERA INMEDIATA A LA ACCIONANTE, LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN QUE REPOSA EN EL IDU, RESPECTO A LA EXPROPIACIÓN DE UNA PARTE DEL BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA No.50S-40279765, EN FAVOR DE LA SOCIEDAD INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. – EN LIQUIDACIÓN IDENTIFICADA CON NIT 830.026.001-1, QUE CULMINÓ CON LA RESOLUCIÓN 1246 DEL 27 DE MARZO DE 2019. 16

5.2 ORDENAR AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, QUE SE ABSTENGA DE AHORA EN ADELANTE REINCIDIR EN LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, PERTURBACIÓN A LA PUBLICIDAD, Y DEFENSA DE LA SOCIEDAD INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. – EN LIQUIDACIÓN. 16

6 NOTIFICACIONES 16

6.1 AL ACCIONADO INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU 16

6.2 LA SUSCRITA RECIBE NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL CORREO ELECTRÓNICO TELEALDIA777@GMAIL.COM ATENTAMENTE, 17

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

ACCIÓN DE TUTELA POR, VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, PERTURBACIÓN A LA PUBLICIDAD, Y DEFENSA

Señor

JUEZ MUNICIPAL (REPARTO)

E. S. D.

Acción de tutela: por VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, PERTURBACIÓN A LA PUBLICIDAD, Y DEFENSA

Accionado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, establecimiento público de orden distrital con NIT: 899.999.081-6

Director: DIEGO SÁNCHEZ FONSECA

Funcionarios presuntamente vulneradores del derecho fundamental al debido proceso por faltar al principio de publicidad

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

| Nombre | IDENTIFICACIÓN | UBICACIÓN |
|--|--------------------------|--|
| Diego Sánchez Fonseca Director IDU | C.C. 79.237.267 | atnciudadano@idu.gov.co/ correspondencia@idu.gov.co Cl. 22 #627, Bogotá Tel:(601) 3386660 Director |
| María Del Pilar Grajales Restrepo Directora Técnica de Predios IDU | C.C. N.º 51.700.138 | maria.grajales@idu.gov.co Cl. 22 #627, Bogotá Tel:(601) 3386660 Subdirección técnica de predios |
| ROSITA ESTHER BARRIOS ESTRADA | C.C. N.º C.C. 32.040.987 | rosita.barrios@idu.gov.co Cl. 22 #627, Bogotá Tel:(601) 3386660 Subdirectora General |

Accionante: INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A, EN LIQUIDACIÓN, NIT. 830.026.001-1.

Apoderada: DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA C.C. 40.916.910 Tp. 280612 C.S. de la J.

Respetado señor juez de amparo:

Diana Cristina Ruiz Ariza, identificada con Cedula de ciudadanía No. 40.916.910, actuando a nombre y en representación de la compañía INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A, EN LIQUIDACIÓN, NIT. 830.026.001-1., tal como consta en el poder general otorgado notaria 73 del círculo de Bogotá D.C número 4584 del 10 de septiembre de 2021, residente en la ciudad de Bogotá D.C, por medio del presente documento presento ante usted acción de tutela contra INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, establecimiento público de orden distrital con con NIT: 899.999.081-6, para que suspenda los actos perturbadores del derecho de mi poderdante a POR, VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, PERTURBACIÓN A LA PUBLICIDAD, Y DEFENSA, que está siendo desconocido de acuerdo con los siguientes

1 HECHOS

1.1 El día 27 de marzo de 2019 el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, en razón a la expropiación por vía administrativa parcial, sobre una zona de terreno de

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

3330.81 m2, con matrícula inmobiliaria 50S- 40279765, profirió para el pago la resolución 1246 del 2019, rad: 20193250012466, RT. 46881,

- 1.2 La resolución ordenó el pago de la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$2.443.648.757) MONEDA CORRIENTE, menos los descuentos que por ley se debieran realizar; ordenó que enviaran el dinero; en primera instancia envió el título judicial a órdenes del juzgado 12 C. del Cto, a fin de dar trámite financiero a una demanda inscrita de Visocol contra Constructora y Promotora BCP Ltda. en Liquidación, esto, desde el 15 de marzo del año 2002, y que si no era cobrado diez días después, el juzgado lo debería regresar a la entidad bancaria. (Art. 3º de la resolución). El día 13 de enero de 2021, el juzgado 12 C. del Cto, ordenó convertir todo el dinero al Banco Agrario, por cuanto INVERSORA Y PROMOTORA GERONA no era parte alguna el proceso referido.
- 1.3 El día 24 de septiembre de 2021, la empresa beneficiaria del título, aquí accionante, a través de su apoderada se remitió al Banco Agrario con el fin de que éste realizara el desembolso, el banco le informó que el título ya había sido pagado a un sujeto llamado VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO C.C. 4.318.158. Que había sido pagado por orden del IDU. Presentamos el reclamo en el IDU, el mismo día 24 de septiembre de 2021. Radicado N° 20215261582152.
- 1.4 El día, 13 de octubre de 2021, presentamos un nuevo derecho de petición a nombre del director del IDU doctor Diego Sánchez Fonseca. Solicitando el pago.
- 1.5 El día 28 de octubre de 2021, María Del Pilar Grajales Restrepo, Directora Técnica de Predios, en asocio con Marcela Zuluaga Franco, dio contestación a los dos derechos de petición con una absurda justificación y profirió que el

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

dinero le fue entregado al señor VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, presunto delincuente.

- 1.6 Justificaron el pago con una supuesta acta de conciliación firmada en el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral de la “Fundación Derecho y Equidad”, el acta aparece firmada entre el señor VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, y el doctor CARLOS ADNER VIVEROS DIAZ, supuestamente apoderado de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, por poder otorgado por el señor MIGUEL ARANGO DE FEX, representante legal de la compañía. En manera alguna el representante legal realizó el hecho, ni miembro alguno de la compañía firmó tal poder, ni conocemos al sujeto.
- 1.7 Los únicos documentos que anexó la funcionaria fueron: una fotocopia del acta de conciliación sin anexo alguno y copia de un memorando en el que MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, Directora Técnica de Predios IDU, ordenó a DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO, Subdirectora Técnica de Tesorería y Recaudo, IDU, hacer el cheque a nombre de VICTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, por cuanto una mujer llamada DORYS EUGENIA ÁLVAREZ GARZÓN, lo solicitó.
- 1.8 El IDU ejerció instrucción, al hacer efectivo el pago con la mera presentación del “Acta Virtual de Conciliación”, omitió atender la ley que regula los efectos del acuerdo conciliatorio, cuya acta únicamente presta mérito ejecutivo. (Artículo 66 Ley 446 de 1998). Y bien es sabido que un proceso ejecutivo se adelanta en jurisdicción civil, ante un juez y no es un documento intercambiable ante una pagador.
- 1.9 EL IDU OMITIÓ EL DEBER DE ENTREGAR LA TOTALIDAD DEL PROCESO A LA BENEFICIARIA POR EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA

El IDU en manera alguna atendió las insistentes solicitudes de entregar INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A – EN LIQUIDACIÓN, N.I.T. 800.207.579-4 propietaria del título judicial, el expediente completo del proceso de la EXPROPIACIÓN del inmueble

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

registrado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50S 40279765 asunto que nos ocupa. A pesar que se lo solicitamos desde el día 13 de octubre de 2021.

1.9.1 DE MANERA VERBAL EN LAS INSTALACIONES DEL IDU SE EXCUSARON PORQUE SEGÚN LA FUNCIONARIA EL PROCESO YA ESTABA ARCHIVADO

Desde octubre 13 de 2021 (En una reunión en las instalaciones del IDU con una funcionaria quien al parecer se llamaba MARCELA ZULUAGA, le realizamos la solicitud de todas las copias del proceso de expropiación del inmueble (Folio 137 del expediente elaborado por la accionante)

El día 13 de octubre ante nuestra inconformidad, exigimos nos atendiera personalmente la encargada de tesorería, finalmente nos atendió Marcela Zuluaga Franco, Abogada. Quien de manera burlesca nos dijo que el proceso estaba archivado, y se llevarían otros quince días para poderlo desarchivar, que ya el juzgado había decidido sobre el dinero, y que debíamos iniciar un proceso administrativo.

1.9.2 LA SUBDIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS, CONSIDERÓ PETICIONES OSCURAS Y REITERATIVAS EL QUE SOLICITÁRAMOS EL CONSTITUCIONAL PAGO Y ADEMÁS OMITIÓ EL ENTREGAR EL ARCHIVO COMPLETO DEL PROCESO

1.9.3 El día febrero 14 de 2022 SOLICITAMOS EL EXPEDIENTE a MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO (Folio 245 del expediente elaborado por la accionante)

3.2. No aceptamos mas vulneraciones a la ley de transparencia solicitamos inmediata entrega de toda la información que repose en los archivos del IDU respecto a la expropiación de la Resolución No 1246 del 27 de marzo de 2019 RT. 46881 A. Solicitudes realizadas desde octubre 14 de 2021.

1.9.4 EL IDU VIOLÓ LA LEY DE TRANSPARENCIA Y CON MANIOBRAS PRESUNTAMENTE BUSCA TENER SENTENCIAS A SU FAVOR

Presentamos sendas denuncias ante los entes disciplinarios, de control y ante la Fiscalía General de la Nación. Desde el inicio avisamos a las directivas del IDU para que se hicieran

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

parte en los procesos y colaboraran en la investigación. Como represalia recibimos amenazas que buscaron silenciarnos para impedirnos el exigir, primeramente el dinero que no nos ha pagado la entidad y segundo la documentación completa del proceso, como consta en los largos escritos colmados de irregularidades, los cuales debemos atacar con nulidades, recursos etc. (Fols 182, 233-234 del proceso construido por la suscrita apoderada accionante.)

El IDU flagrantemente violó la ley de transparencia

“La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional es la herramienta normativa que regula el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública en Colombia. Tiene como objetivo que la información en posesión, custodia o bajo control de cualquier entidad pública, órgano y organismo del Estado colombiano, persona natural o jurídica de derecho privado que ejerza función pública delegada, reciba o administre recursos de naturaleza u origen público o preste un servicio público, esté a disposición de todos los ciudadanos e interesados de manera oportuna, veraz, completa, reutilizable y procesable y en formatos accesibles.”ⁱ

ABC de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional

1.9.5 LA DOCUMENTAL DEL PROCESO QUE POR LEY DEBE REPOSAR EN EL IDU JAMÁS NOS LO ENTREGÓ

Los mas de doscientos folios del expediente que nosotros armamos, constituyen un documento colmado de meras justificaciones del IDU y amenazas, lo elaboramos para nuestra defensa, pero no se pueden encontrar los documentos que debe tener obligatoriamente entregar las directivas del IDU.

Como es el orden legal , una expropiación por interés público requiere el cumplimiento de ciertos procedimientos, además si se llega a una resolución de expropiación por vía administrativa, la entidad deberá seguir múltiples pasos (LEY 388 DE 1997), también deberá soportar todo el procedimiento para el pago de los dineros, todas y cada una de las comunicaciones internas y externas, verificaciones, memorandos, transacciones, recibos de pago, copias de cheques, los anexos del acta de conciliación etc.

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso . sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

1.9.6 LOS ÚNICOS DOCUMENTOS O PAPELES RECIBIDOS, POR PARTE DE LAS DIRECTIVAS DEL IDU, SON LOS QUE JUSTIFICAN LAS MANIOBRAS REALIZADAS POR PRESUNTOS DELINCUENTES PARA QUE LA DIRECTORA DE PREDIOS ORDENARA A LA TESORERA DEL IDU HACER UN CHEQUE A VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO

De todos los documentos que deben reposar en el IDU, no hemos recibido, sino la copia de la resolución, que ya la habíamos encontrado en una página web, la presunta constancia de ejecutoria, la fraudulenta acta de conciliación sin anexos, el memorando en el que una presunta delincuente DORYS EUGENIA ÁLVAREZ GARZÓN le solicita a MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO que le elaboren un cheque a nombre de VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, unas verificaciones de firmas de poderes que no concuerdan con lo que quieren verificar, esto en la notaría 7ª de Bogotá, con prehistóricos sellos de caucho, sin la biometría exigida, firmas falsas del representante legal de la empresa sobre papel borroso. Sin embargo no se registró ni una sola llamada al representante legal de la empresa INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A, EN LIQUIDACIÓN, para verificar si el IDU podía entregar los **dos mil trescientos sesenta y un millones trescientos ochenta y tres mil trescientos setenta y cuatro pesos (\$2.361.383.374,00) moneda corriente**, a una presunta red delincuencia.

Pero todo el cumulo de documentos que, insistimos debe soportar el proceso, no nos los entregó el IDU.

1.9.1 TAMBIÉN HAY UN FALTANTE DE DINERO DEL QUE EL IDU JAMÁS ENTREGÓ JUSTIFICACIÓN, ESCONDE LA DOCUMENTAL

Tampoco entregó el IDU, los documentos que justifiquen lo qué sucedió con la diferencia del dinero ordenado en la expropiación: **dos mil cuatrocientos cuarenta y tres millones, seiscientos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta y siete pesos (\$2.443.648.757) moneda corriente** y el dinero que envió al juzgado 12 C. del Cto., suma de **dos mil trescientos sesenta y un millones trescientos ochenta y tres mil trescientos setenta y cuatro pesos (\$2.361.383.374,00) moneda corriente**, que debía ser entregado a la compañía sub judice; o sea, también hace falta la documentación que justifique en qué se gastaron los **ochenta y dos millones, doscientos sesenta y cinco mil trescientos ochenta y tres pesos (\$82.265.383) moneda corriente**.

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. Sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

- 1.9.2 MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO DE MANERA GROSER Y DILATORIA EVADIÓ ENTREGAR LA DOCUMENTAL SOLICITADA Y DICE QUE YA RESPONDIÓ LA SOLICITUD DE LOS DOCUMENTOS.

La funcionaria MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, de manera grosera, el día 25 de marzo de 2022 envió un escrito a la suscrita apoderada de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA SA EN LIQUIDACIÓN, en el cual tergiversa y diluye la solicitud de la accionante y únicamente entrega la copia de la resolución y otra hoja según afirma ser la constancia de ejecutoria.

Lo anterior simplemente confirma una vulneración al debido proceso, al principio de publicidad, el IDU de manera arbitraria retiene toda la documental del proceso que adelanto el IDU para expropiar el lote inmobiliaria y ordenar pago del precio de la indemnización, por la expropiación de una parte del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40279765, en favor de la sociedad INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. – EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT 830.026.001-1.

Con relación al punto 3.2: Se hace saber que en ningún momento esta entidad ha vulnerado la ley de transparencia, y en atención a que está solicitando la resolución de expropiación para el RT. 46881; con toda atención se adjunta Resolución de expropiación No.1246 de fecha 27/03/2019 Junto con la constancia de ejecutoria.

- 1.9.3 A LA SUBDIRECTORA DEL IDU, ROSITA ESTHER BARRIOS, TAMBIÉN LE SOLICITAMOS LA TOTALIDAD DEL PROCESO DESDE EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2022 Y NO DIO RESPUESTA ALGUNA (folio de 230 del expediente elaborado por la accionante)

2.3. No aceptamos mas vulneraciones a la ley de transparencia, exigimos inmediata entrega de toda la información que repose en los archivos del IDU respecto a la expropiación de la Resolución No 1246 del 27 de marzo de 2019 RT.46881 A. Solicitudes realizadas desde octubre 14 de 2021.

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

- 1.9.4 La funcionaria ROSITA ESTHER BARRIOS, subdirectora del IDU, ignoró la solicitud no dio respuesta alguna a la solicitud, a la fecha, y desde febrero 14 de 2022 la funcionaria no dio respuesta alguna al derecho de petición que incoamos.

Cabe anotar que la referida funcionaria, el día 25 de enero de 2022, entregó únicamente el ilegible poder que nunca firmó el representante legal MIGUEL ARANGO DE FEX al abogado CARLOS ADNER VIVEROS DIAZ, acompañó a este papel una verificación manipulada: un correo a la notaría 7ª de Bogotá con un pdf adjunto, era de otro poder no del aquí referido. Una copia de la cámara de comercio de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA EN LIQUIDACIÓN, y después, el día 28 de enero de 2022, de manera mentirosa afirmó que entregó una solicitud de verificación a la notaría 4ª de Bogotá.

- 1.9.5 MIGUEL ARANGO DE FEX, declaró bajo juramento que no conoce al abogado CARLOS ADNER VIVEROS DIAZ, que jamás firmó el poder que presentó el IDU y que la firma del poder entregado por el IDU no es suya. FOLIOS (fols. 201-204 del expediente elaborado por la apoderada accionante).
- 1.9.6 Documentos entregados por la funcionaria ROSITA ESTHER BARRIOS ESTRADA, el día 25 de enero de 2022. (fol. 194 del expediente elaborado por la apoderada accionante)

1. Copia del acta de conciliación efectuada en el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral- Acta de Conciliación Virtual de fecha 27 de octubre de 2020.
2. Copia del Certificado de Cámara de Comercio de Bogotá con código de verificación 121029539DCFBD de fecha 19 de marzo de 2021
3. Copia del poder especial otorgado al doctor CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, presuntamente por el señor MIGUEL GERMÁN ARANGO DE FEX
4. Copia del correo electrónico de fecha 9 de febrero de 2021 remitido por la señora YOLEI ARIAS, jefe de la sección de autenticaciones informa que los sellos y firmas del poder otorgado al señor CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, corresponden a la notaría

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. Sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

- 1.9.7 La accionante manifestó al IDU, bajo juramento que desconocía todo el asunto de la conciliación, el tema fue ignorado y aun así la autoridad no se dignó a entregar las copias del expediente de manera íntegra (fols. 196-197 del expediente elaborado por la apoderada accionante)

Reza la declaración juramentada

1. Que no conocemos y nunca otorgamos poder alguno al doctor CARLOS ADNER VIVEROS DIAZ C.C. 79.458.607 para que conciliara a nombre de la empresa que represento deuda alguna con persona alguna.
2. Que no es cierto que la empresa INVERSORA Y PROMOTORA GERONA EN LIQUIDACIÓN S.A. Nit 830.026.001-1, tuviera deuda alguna con el señor VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO identificado con cedula de ciudadanía 4.318.158.
3. Que jamás fuimos notificados por el centro de conciliación denominado CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAMIENTO, SOLUCIÓN INTEGRAL DE LA FUNDACIÓN "DERECHO Y EQUITAD", para asistir a conciliación alguna con persona alguna.
4. Que a la fecha jamás recibimos dinero alguno, de la empresa INVERSORA Y PROMOTORA GERONA EN LIQUIDACIÓN S.A. Nit 830.026.001-1, proveniente del pago del IDU, por expropiación administrativa resolución 1246 de 27/03/2019, ni por la indemnización alguna de dicha expropiación.
5. Que el dinero correspondiente a los pagos referidos en el numeral anterior por valor de de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$2.443.648.757) MONEDA CORRIENTE, menos gastos descontados, de los cuales la entidad no ha presentado justificación alguna, quedaron

1.10 LOS HECHOS PRESENTADOS MUESTRAN LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, PERTURBACIÓN A LA PUBLICIDAD, Y DEFENSA

Resumen: el IDU, a través de sus funcionarias directivas, de manera dilatoria, entregó documentos que no corresponden a la totalidad del expediente, son meras maniobras presuntamente, para justificar la entrega a una presunta red delincriminal y no los documentos reales que legalmente deben reposar en el expediente.

1.11 INVERSORA Y PROMOTORA GERONA EN LIQUIDACIÓN, no recibió de parte del IDU, de manera íntegra, la documental que debe contener un proceso de expropiación administrativa

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

Documentos que registren un debido proceso hasta el pago ordenado en la resolución ley 388 de 1997, y que deben existir en los manuales de tesorería para la custodia, entrega y desembolso de los recursos previendo el riesgo (o los requeridos en normas, decretos, circulares). Tal como lo ordena la Constitución Nacional, art. 29 con el debido proceso. (Consejo de Estado, Sección Quinta en Descongestión, Sentencia 25000232400020080008901, May. 31/18.)

2 FUNDAMENTOS DE DERECHO

2.1 Artículo 86 de la Carta Constitucional de 1991

2.2 Decreto 2591 de 1991, Ley 1755 de 2015

2.3 El principio de publicidad es garantía mínima del derecho fundamental al debido proceso art. 29 CN.

Sentencia C-641 de 2002 Corte Constitucional. El principio de publicidad constituye una garantía mínima del debido proceso.

Los hechos presentados constituyen una violación al derecho fundamental la información, al debido proceso, y defensa a la empresa INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN. En razón a que a sus socios, representante legal y a la suscrita apoderada, se les impide acceder a la documentación que debe contener toda la información respecto a la expropiación por vía administrativa referida.

“Predica, el artículo 29 de la Constitución Política determina que el principio de publicidad constituye una garantía mínima del debido proceso en las actuaciones públicas y, especialmente, en las judiciales, cuando categóricamente afirma que toda persona tiene derecho a “un debido proceso público”.

2.4 Sentencia T-206/18. Acción de tutela en materia de derecho de petición-procedencia de manera directa por ser derecho fundamental de aplicación inmediata

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

Reza la sentencia T-206/18

“Este Tribunal ha considerado que la acción de tutela es el mecanismo procedente para determinar la violación del derecho de petición. En esa dirección, la sentencia T-084 de 2015 sostuvo que “la tutela es un mecanismo idóneo para proteger el derecho de petición de los administrados, toda vez que por medio del mismo se accede a muchos otros derechos constitucionales”. De acuerdo con lo anterior, la Corte ha estimado “que el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo”.

3 PRUEBAS Y ANEXOS

Solicito señor juez, se decreten, practiquen y tengan como pruebas las siguientes arts. 164 s.s. a fin de que sean valoradas para conceder el amparo solicitado.

- 3.1 El expediente elaborado por la suscrita apoderada que da cuenta de los hechos violadores al debido proceso por vulneración al principio de publicidad. Anexo expediente con 267 folios.
- 3.2 LAS DECLARACIONES de las funcionarias ROSITA ESTHER BARRIOS, MARIA DEL PILAR HURTADO GRAJALES, DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO Subdirectora Técnica de Tesorería y Recaudo responsables y representantes de la entidad, realizadas a través de sus propios escritos. (Folios, 194, 221-222, del expediente elaborado por la apoderada accionante)
- 3.3 LAS SENDAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA SUSCRITA APODERADA ACCIONANTE (FOLIOS, 137, 230 245 del expediente elaborado por la apoderada accionante).
- 3.4 DECLARACIÓN JURAMENTADA ante notario público de los representantes de la empresa accionante, quienes declaran que no tienen conocimiento de las justificaciones que entregaron las funcionarias para entregar a un presunto delincuente la totalidad del dinero ordenado por la RESOLUCIÓN : 1246 del 27

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

de marzo de 2019 RAD. 20193250012466 RT. 46881 A (FOLIOS, 196-197 del expediente elaborado por la apoderada accionante).

4 Anexos

4.1 El presente escrito de Tutela

4.2 Poder general INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN CON VIGENCIA

5 SOLICITUDES

Por las razones de hecho y de derecho, solicitamos al honorable juez de amparo se sirva conceder el amparo implorado:

POR, VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, PERTURBACIÓN A LA PUBLICIDAD, Y DEFENSA

5.1 Ordenar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, que a través, de su director Diego Sánchez Fonseca, realice todas las acciones que sean necesarias y entregue de manera inmediata a la accionante, la totalidad de la documentación que reposa en el IDU, respecto a la EXPROPIACIÓN de una parte del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No.50S-40279765, en favor de la sociedad INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. – EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT 830.026.001-1, que culminó con la resolución 1246 del 27 de marzo de 2019.

5.2 Ordenar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, que se abstenga de ahora en adelante reincidir en **la violación al debido proceso, perturbación a la publicidad, y defensa** de la sociedad INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. – EN LIQUIDACIÓN.

6 NOTIFICACIONES

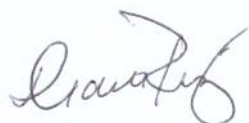
6.1 Al accionado INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

notificacionesjudiciales@idu.gov.co

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

| | | |
|--|--------------------------|--|
| A los funcionarios implicados en la VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, PERTURBACIÓN A LA PUBLICIDAD, Y DEFENSA: Nombre | IDENTIFICACIÓN | UBICACIÓN |
| Diego Sánchez Fonseca Director IDU | C.C. 79.237.267 | atnciudadano@idu.gov.co/ correspondencia@idu.gov.co Cl. 22 #627, Bogotá Tel:(601) 3386660 Director |
| María Del Pilar Grajales Restrepo Directora Técnica de Predios IDU | C.C. N.º 51.700.138 | maria.grajales@idu.gov.co Cl. 22 #627, Bogotá Tel:(601) 3386660 Subdirección técnica de predios |
| ROSITA ESTHER BARRIOS ESTRADA | C.C. N.º C.C. 32.040.987 | rosita.barrios@idu.gov.co Cl. 22 #627, Bogotá Tel:(601) 3386660 Subdirectora General |

6.2 La suscrita recibe notificaciones personales en el correo electrónico Telealdia777@gmail.com Atentamente,



DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA
APODERADA ACCIONANTE
TP. 280612 C.S. de la J.
Celular 3002730056

ⁱ Abc de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO TREINTA Y DOS PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ SISTEMA ACUSATORIO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022)

Procede el Despacho a resolver la acción de tutela impetrada por INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, a través de apoderada judicial, en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, de publicidad y de petición.

I. HECHOS

Relató la apoderada que el 27 de marzo de 2019, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, con ocasión de la expropiación administrativa parcial sobre una zona del terreno con matrícula inmobiliaria 50S-40279765, profirió la Resolución No. 1246 del 2019, en la que se ordenó el pago de la suma de \$2.443.648.757 m. l. menos los descuentos legales a que hubiera lugar.

Fue así como, según su dicho, en primera instancia se envió el título judicial a órdenes del Juzgado 12 Civil del Circuito con el fin de dar trámite financiero a una demanda inscrita de Visocol Ltda. contra la Constructora y Promotora BCP Ltda. En Liquidación el día 15 de marzo de 2002 (sic), y se determinó que, si no era cobrado diez días después, la autoridad judicial debería regresarlo a la entidad bancaria. Juzgado 12 Civil que el 13 de enero de 2021 ordenó convertir todo el dinero al Banco Agrario ya que INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN no era parte alguna en el proceso.

Seguidamente, señaló que el día 24 de septiembre de 2021, la empresa beneficiaria del título, en sus términos, la parte accionante, se remitió al Banco Agrario con el fin de que realizara el desembolso, el cual le indicó que el título ya se había pagado a un sujeto de nombre Víctor Hugo Jiménez Castro por orden del el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, por lo que ese mismo día se elevó un reclamo ante la entidad accionada bajo el radicado No. 20215261582152, el cual también se reiteró el día 13 de octubre de 2021.

Al respecto, indicó que el día 28 de octubre de 2021, la directora técnica de predios de la entidad accionada dio contestación a la petición presentada, que a su parecer fue absurda, pues se justificó el referido pago con una supuesta acta de conciliación firmada por el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral de la “Fundación Derecho y Equidad”, la cual aparece firmada entre Víctor Hugo Jiménez Castro y Carlos Adner Viveros Díaz, supuesto apoderado de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, por poder otorgado por Miguel Arango de Fex, representante legal de la compañía, quien en realidad no lo hizo ni ningún otro miembro de la sociedad, máxime cuando ni siquiera se conoce a las personas involucradas.

Además, destacó, entre otros aspectos, que se suministró dicha acta de conciliación sin anexo alguno y copia de un memorando en el que María del Pilar Grajales Restrepo, Directora Técnica de Predios del IDU, le ordenó a Diana Patricia Valderrama Alvarado, Subdirectora Técnica de Tesorería y Recaudo de la misma entidad, realizar el cheque a nombre de Víctor Hugo Jiménez Castro, por orden de una señora de nombre Dorys Eugenia Álvarez Garzón.

Así las cosas, subrayó que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU omitió suministrarle de manera íntegra a la parte accionante, toda la documentación que debe contener un proceso de expropiación administrativa, pese a que se lo volvió a requerir el pasado 14 de febrero de 2022.

No obstante, puntualizó, entre otros aspectos, que:

*“De todos los documentos que deben reposar en el IDU, no hemos recibido, sino la copia de la resolución, que ya la habíamos encontrado en una página web, la presunta constancia de ejecutoria, la fraudulenta acta de conciliación sin anexos, el memorando en el que una presunta delincuente DORYS EUGENIA ÁLVAREZ GARZÓN le solicita a MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO que le elaboren un cheque a nombre de VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, unas verificaciones de firmas de poderes que no concuerdan con lo que quieren verificar, esto en la notaría 7ª de Bogotá, con prehistóricos sellos de caucho, sin la biometría exigida, firmas falsas del representante legal de la empresa sobre papel borroso. Sin embargo no se registró ni una sola llamada al representante legal de la empresa INVERSORA Y PROMOTORAGERONA S.A, EN LIQUIDACIÓN, para verificar si el IDU podía entregar los **dos mil trescientos sesenta y un millones trescientos ochenta y tres mil trescientos setenta y cuatro pesos (\$2.361.383.374,00) moneda corriente**, a na presunta red delincuencial.*

(...)

*Tampoco entregó el IDU, los documentos que justifiquen lo qué sucedió con la diferencia del dinero ordenado en la expropiación: **dos mil cuatrocientos cuarenta y tres millones, seiscientos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta y siete pesos (\$2.443.648.757) moneda corriente** y el dinero que envió al juzgado 12 C. del Cto., suma de **dos mil trescientos sesenta y un millones trescientos ochenta y tres mil trescientos setenta y cuatro pesos (\$2.361.383.374,00) moneda corriente**, que debía ser entregado a la compañía subjudice; o sea, también hace falta la documentación que justifique en qué se gastaron los **ochenta y dos millones, doscientos sesenta y cinco mil trescientos ochenta y tres pesos (\$82.265.383) moneda corriente**”.*

Por lo anterior, solicitó que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, de publicidad y de petición de su prohijada y, en consecuencia, se ordene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU que le entregue la totalidad de la documentación que reposa en el expediente de la expropiación administrativa antes descrita, así como que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en las mismas actuaciones que den lugar a la violación de sus garantías superiores.

Posteriormente, el 11 de abril de 2022, la apoderada judicial de la accionante allegó un memorial ante este Juzgado, en el que deprecó que *“en manera alguna dé cumplido el hecho causal, el IDU no cumplió con la solicitud presentada”*, puesto que además de que falta documentación, la que ha sido suministrada se encuentra indebidamente organizada de manera cronológica y su foliatura es errada y en lápiz.

Por ello, hizo una relación de la documental que no fue anexada en la entrega, así:

| Los escritos describen unos documentos que reciben o entregan, los cuales no fueron anexados a la entrega: | | | |
|--|--|------------|-----------------------|
| NUMERO DE FOLIO | CONTENIDO | FECHA | RADICADO |
| 445 | DE DORYS EUGENIA ÁLVAREZ FAJARDO RECEPCIÓN VIRTUAL ATENCIÓN AL MEMORANDO 91043 TDJ 7922356 RT 46881A ANEXOS NO LOS ENTREGARON | 4/04/2021 | ORFEO 20215260730852 |
| 465- 465 R | MEMORANDO MARÍA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO A DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO TESORERA GERONA FALTAN LOS ANEXOS ☐ COPIA DEL CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2021 REMITIDO POR LA SEÑORA YOLEIMA ARIAS, JEFE DE LA SECCIÓN DE AUTENTICACIONES INFORMA QUE LOS SELLOS Y FIRMAS DEL PODER OTORGADO AL SEÑOR CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, CORRESPONDEN A LA NOTARÍA SOLICITUD AL NOTARIO CUARTO DEL BOGOTÁ MEDIANTE COMUNICACIÓN IDU NO 20225050124571 CON RESPECTO A LA AUTENTICIDAD DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL DEL PODER OTORGADO POR EL SEÑOR MIGUEL GERMÁN ARANGO DE FEX AL ABOGADO CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MEDIANTE EL CUAL SE FACULTA AL APODERADO PARA QUE INICIE Y LLEVE A SU CULMINACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y ACUERDO CONCILIATORIO CON EL ACREEDOR EL SEÑOR VICTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO. | 18/02/2021 | DTDP 20213250035033 |
| REPITE 460-460R | ORFEO RECURSO DE REPOSICION SIN NO AGREGÓ EL ESCRITO PRESENTADO POR LA ACCIONANTE. | 17/11/2021 | ORFEO 2021 5261884922 |
| REPITE 473-473R | JEAN CARLO SUESCUN SANABRIA SUBDIRECTOR GENERAL JURÍDICO RESPONDE A LA PERSONERÍA NO INCORPORAN FOLIOS QUE EL MEMORIAL DICE ANEXAR 20223250235961 20223250238241 | 10/02/2022 | DTDP 2022325024371 |
| REPITE 480- 480R | SEGUNDO DERECHO DE PETICIÓN SIN PREFIJO 202115261687312 NO ALLEGAN ANEXOS | 12/10/2021 | |
| REPITE 481-482 | REPITE PRIMER DERECHO DE PETICIÓN NO ALLEGAN ANEXOS PRESENTADOS | 24/09/2021 | 20215261582152,00 |
| 528-529R | SIN ANEXOS SIN ESCRITO DE TUTELA SIN RADICADO | | |
| 530-534 R | SOLICITUD DE CONCILIACIÓN RADICADO ORFEO SIN ANEXOS SIN ESCRITO DE SUBSANACIÓN | 28/01/2022 | |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 446 - 446R | DORYS EUGENIA ÁLVAREZ FAJARDO A MARCELA ZULUAGA FRANCO SIN RADICADO, ES UN PASQUÍN, SIN RADICADO, SIN FIRMA AYN CORREO QUE LO RESPALDE | 27/04/2021 | |
|------------|--|------------|--|

Igualmente, resaltó que no se proporcionó la documental completa de tesorería que registre el trámite de entrega del cheque de gerencia a Víctor Hugo Jiménez Castro, esto es, las evidencias de que el IDU haya buscado al representante legal de la parte accionante para verificar el desembolso de la suma en cuestión; así como:

- 4.1.1. No anexaron la grabación en la ampliación de la denuncia, de manera virtual, ante el IDU el día 6 de diciembre de 2021.
- 4.1.2. La documental referida en los numerales 3º y 4º del presente escrito.
- 4.1.3. NOTA: Por la misma naturaleza de la presente accion, manifestamos muy respetuosamente al juez(a) de amparo que no autorizamos el manejo de nuestros datos personales al IDU.

Finalmente, el 18 de abril de 2022, la parte accionante, vía correo electrónico, remitió a este Juzgado otro memorial ratificando el contenido del memorial anterior, en el que aportó además una extensa documentación aportada por el IDU, sobre la cual hizo la siguiente observación: *“recibimos unas hojas incompletas, indebidamente foliadas y con la evidencia de que algunas piezas fueron presuntamente sustraídas u ocultas (...) el IDU en manera alguna entregó los soportes anexos al acta de conciliación de la audiencia adelantada el 27 de octubre de 2021”*.

II. ANTECEDENTES PROCESALES

Mediante auto del 6 de abril de 2022, se avocó el conocimiento de la presente acción de tutela y se ordenó enterar al accionado INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU de los hechos narrados por la parte accionante para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción. Trámite que se surtió a través de correo electrónico a las direcciones notificacionesjudiciales@idu.gov.co, maria.grajales@idu.gov.co, correspondencia@idu.gov.co y rosita.barrios@idu.gov.co, a cuyas bandejas de entrada efectivamente llegó la comunicación hecha por este juzgado, tal como lo reportó el servidor de correo electrónico de Outlook.

III. CONTESTACIÓN DEL ACCIONADO

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

Mediante escrito allegado a través de correo electrónico, Carlos Francisco Ramírez Cárdenas, en su calidad de Director Técnico de Gestión Judicial del IDU, se refirió a cada uno de los hechos consignados en el escrito de tutela, manifestaciones más relevantes que se reseñarán a continuación.

Indicó que frente al hecho 1º, que no es cierto, ya que mediante la Resolución No. 1246 del 27 de marzo de 2019, la entidad accionada ordenó la expropiación administrativa de una zona de terreno que hace parte del predio identificado con el registro topográfico 46881ª y el folio de matrícula 50S-40279765, pero no para el pago.

Frente al hecho 2º, adujo que es parcialmente cierto, toda vez que en ese acto administrativo se ordenó el pago como precio indemnizatorio como consecuencia de la expropiación administrativa, el cual se puso a disposición del Juzgado 12 Civil de Circuito de Bogotá, en atención a que se encontraba vigente inscripción de demanda en proceso ordinario registrado en la anotación No. 9 del folio de matrícula inmobiliaria SOS-40279765, de Vivienda Social Colombiana Ltda. radicada mediante oficio No. 661 del 15 de marzo del 2002, inscripción ordenada por esa autoridad judicial.

Respecto del hecho 3º, indicó que es parcialmente cierto sobre el pago que se realizó al señor Víctor Hugo Jiménez Castro, con fundamento en la solicitud realizada mediante radicado No. 20215260129932 del 27/01/2021, por la abogada Dorys Eugenia Álvarez Garzón, en calidad de apoderada del señor Víctor Hugo Jiménez Castro, quien elevó la petición a la Dirección Técnica de Predios del IDU, solicitando endosar y autorizar el pago del depósito judicial No. 400100007338617, a nombre de Jiménez Castro. Y para ello, aquella aportó los siguientes documentos:

“Acta de conciliación que se llevó a cabo en el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral el día 27 de octubre del 2020, “Fundación de Derecho y Equidad” autorizada mediante Resolución 0167 del 15 de febrero del 2018 por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Acta que fue registrada ante el Ministerio de Justicia y del Derecho de acuerdo con el código del centro 1455, numero del caso en el centro: 363 de fecha 22 de octubre del 2020. Cuantía indeterminada fecha de resultado el 27 de octubre del 2020, identificador Nacional de SICAAC, caso No. 1468705, Resultado No. 1371667, conciliador el Dr. EDUARDO GRILLO OCAMPO identificado con cédula de ciudadanía No. 19140588”.

Acta en la que se evidencia que entre las partes convocante, el señor Víctor Hugo Jiménez Castro, y la parte convocada, la sociedad INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, llegaron a un acuerdo conciliatorio sobre el valor

total de la indemnización con ocasión a la expropiación administrativa del predio identificado con el RT 46881 A.

Además, aclaró que la solicitud realizada mediante radicado No. 20215261582152 se le dio respuesta mediante el oficio con radicado No. 20213251632541 de fecha 28/10/2021.

Seguidamente, expuso que los hechos 4º y 5º son parcialmente ciertos, pues la petición fue realizada mediante radicado No. 20215261687312 del 12/10/2021, y no del día siguiente, a la cual se dio respuesta mediante el radicado No. 20213251632541 del 28/10/2021, en la que no se justificó el pago, sino que se informó cómo éste se realizó con fundamento en la solicitud realizada mediante radicado No. 20215260129932 del 27/01/2021 por la doctora Dorys Eugenia Álvarez Garzón en calidad de apoderada del señor Víctor Hugo Jiménez Castro, quien realizó la petición a la Dirección Técnica de Predios del IDU de endosar y autorizar el pago del depósito judicial No. 400100007338617, a nombre de aquel.

Por otra parte, puntualizó que el hecho 8º no es cierto, e hizo énfasis en que el Ministerio de Justicia y del Derecho envió al IDU un oficio donde manifestó que *“el Acta que fue registrada ante el Ministerio de Justicia y del Derecho de acuerdo al código del centro 1455, numero del caso en el centro: 363 de fecha 22 de octubre del 2020. Cuantía indeterminada fecha de resultado el 27 de octubre del 2020, identificador Nacional de SICAAC, caso No. 1468705, Resultado No. 1371667, conciliador el Dr. EDUARDO GRILLO OCAMPO identificado con cédula de ciudadanía No. 19140588”*.

Y agregó que no le constaba que el señor Miguel Arango De Fex no firmó el poder, puesto que la accionada fue receptora de unos documentos aportados mediante radicado No. 20215260129932 del 27/01/2021 por la Dorys Eugenia Álvarez Garzón a través de los cuales se demostraba una conciliación debidamente registrada en un centro de conciliación facultada para tal fin. Y señaló que, bajo el principio de la buena fe, los documentos aportados a la entidad por la parte solicitante se presumen de veracidad y autenticidad de su contenido, aunque el IDU en aplicación a la política de la diligencia debida, verificó la autenticidad del poder aportado ante la Notaria que lo autenticó. Incluso, manifestó que quien tenía la carga de confirmar si ese poder era o no auténtico y veraz, era el Centro de Conciliación que fue en donde se llevó a cabo la audiencia de conciliación.

Asimismo, sobre el hecho 7º, señaló que no es cierto, toda vez que junto con la respuesta se adjuntaron los documentos que fueron radicados por Dorys Eugenia Alvarez Garzón en calidad de apoderada de Víctor Hugo Jiménez Castro, así como se le informó a la parte tutelante que si requería otros documentos tenía que solicitarlos al Ministerio de Justicia y del Derecho en calidad de parte del proceso, ya que es en esa entidad en donde se registraron los documentos junto con el acta de conciliación.

Por lo anterior, destacó que el IDU dentro del trámite de adquisición predial realiza los pagos que en derecho correspondan, por lo que la conciliación presentada reunía los requisitos legales, era un documento autentico y hacía tránsito a cosa juzgada.

Sobre el hecho 9º, precisó que no era cierto, ya que la accionante solicitó inicialmente copia de la Resolución de expropiación mediante radicado No. 20225260259902 del 14/02/2022 y no copia del todo el expediente, solicitud a la que se le dio respuesta de fondo mediante radicado No. 20223250599691 del 25/03/2022.

No obstante, alegó que mediante los oficios DTDP 20223250728231 y 20225050729881 del 8 de abril de 2022, se le suministró a la parte accionante la totalidad del expediente.

De otro lado, informó que una de las comunicaciones recibidas por la doctora Diana Cristina Ruíz Ariza, corresponde a la enviada mediante correo electrónico del 31 de enero de 2022 y radicada bajo el No. 20225260215212, la cual fue respondida mediante el oficio No. 20225050242111 del 8 de febrero de 2022; así como puso en conocimiento que la accionante remitió al correo electrónico de una funcionaria del IDU la solicitud calendada del 14 de febrero de 2022, la cual fue radicada en el sistema de archivo y correspondencia ORFEO bajo el No. 20225260652402, y que fue atendida mediante oficio No. 20225050729881.

Además, respecto a los documentos citados por la accionante, indicó que éstos fueron entregados en el marco de la entrevista sostenida con los representantes de Gerona el día 25 de enero de 2022, de lo que se dejó un acta.

Por último, informó que previo análisis de los soportes solicitados a las diferentes áreas del IDU responsables dentro del proceso de adquisición predial, se formuló denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, mediante oficio No. 20225050233601 del 7 de febrero de 2022, la cual cursa en la Fiscalía delegada No. 91 bajo el CUI 110016000050202256528.

Conforme a lo anterior, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU consideró que no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la accionante, en consideración a que siempre ha contestado sus reiterativos requerimientos.

IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La acción de tutela fue instituida en el artículo 86 de la Carta Política de 1991, como un instrumento para reclamar la protección de derechos fundamentales vulnerados o amenazados de la persona, individualmente considerada, como consecuencia de la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares encargados de la prestación de un servicio público, o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión, bastando la confrontación de tal acción u omisión con los preceptos constitucionales.

Problema Jurídico

De acuerdo con la situación fáctica planteada, corresponde a este Despacho establecer si en el presente asunto el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU ha vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, de publicidad y de petición de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, o si en su defecto, a la fecha existe una carencia actual de objeto por hecho superado, en el entendido de que la entidad accionada informó que mediante el oficio 20223250728231 del 8 de abril de 2022, le suministró a la parte accionante la documentación requerida.

Procedencia de la Acción

De conformidad con el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es improcedente **cuando existan otros medios de defensa judicial para la**

protección de los derechos que se invocan, salvo que se ejerza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional en Sentencia SU 712 de 2013, realizó un recuento de la posición sentada por la corporación respecto del carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en los siguientes términos:

“(…) La naturaleza subsidiaria de la tutela pretende evitar que se soslayen los cauces ordinarios para la resolución de las controversias jurídicas, se convierta en un instrumento supletorio cuando no se han utilizado oportunamente dichos medios, o sea una instancia adicional para reabrir debates concluidos. Sin embargo, teniendo en cuenta que el objetivo central de la tutela consiste en asegurar la protección efectiva y oportuna de los derechos fundamentales, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 precisa que “la existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

Cuando se hace uso de la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable la jurisprudencia ha fijado los criterios de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad de la intervención, como los referentes para aceptar la procedencia del amparo ante la presencia de otras vías de defensa judicial, cuyo alcance ha sido explicado en los siguientes términos:

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”.

Cuando se debaten asuntos entre la administración pública y los administrados, el legislador instituyó el procedimiento administrativo y la jurisdicción contenciosa administrativa para dirimir las controversias y litigios originados en esta clase de relación, y puso al alcance de aquéllos, diferentes procedimientos y medios de control judicial de las actuaciones administrativas.

No obstante, se hace procedente la intervención del juez constitucional en asuntos administrativos, cuando lo que se pretende es salvaguardar los derechos fundamentales en cabeza del petente. Para el caso objeto de análisis, teniendo en cuenta que INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN invocó principalmente el amparo de tutela señalando la afectación de sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso, de connotación *iusfundamental*, este Despacho entrará a verificar si efectivamente existe o no tal trasgresión.

Del Derecho Fundamental de Petición

De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Carta Fundamental, toda persona tiene el derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta solución, y si bien es cierto, la norma que contiene las reglas del derecho de petición, en principio se dirige a entidades públicas, la jurisprudencia ha debatido en este sentido las obligaciones que le asiste a la empresa privada, los cuales se encuentran contenidos en la Ley 1755 de 2015, cuyo texto legal es del siguiente tenor:

“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución.

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción”.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”. -Subrayado fuera del texto original-

Existe vulneración de este derecho fundamental cuando la persona que ha elevado la solicitud no recibe respuesta dentro del término que para cada tipo de petición establece la ley, o cuando no obstante haberse emitido la respuesta, la misma no cumpla con los requisitos de fondo, claridad, congruencia y precisión de cara a la solicitud, sin que esto último signifique, claro está, que la respuesta implique una aceptación de lo solicitado.

Por otra parte, es imperioso indicar que mediante el Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020, *Por medio del cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*, se ampliaron algunos términos mientras dure la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19. Así, el artículo 5º del citado Decreto dispuso:

“Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”. -Subrayado fuera del texto original-

Caso Concreto

De conformidad con las pruebas allegadas al expediente y las manifestaciones contenidas en el escrito de tutela, se tiene que INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, a través de apoderada judicial, afirmó que elevó varias solicitudes ante el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, en las que, según su dicho, en términos generales requirió que le suministrara copia de las actuaciones surtidas dentro del proceso de expropiación administrativa adelantado por esa entidad, sobre una zona de terreno que hace parte del predio identificado con el registro topográfico 46881^a y el folio de matrícula 50S-40279765.

Por su parte, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU hizo una detallada mención sobre las múltiples solicitudes presentadas por la parte accionante para acceder a algunas actuaciones surtidas dentro del referido procedimiento administrativo, aunque destacó que a la fecha le había hecho entrega de la totalidad del expediente.

Conocido lo anterior, es pertinente traer a colación el criterio jurisprudencial tendiente a salvaguardar el cumplimiento de los componentes jurídicos y estructurales del derecho de petición, en especial de las características que atañen a su respuesta, ello, de conformidad con lo considerado por la Corte Constitucional en Sentencia C-007 de 2017¹, en los siguientes términos:

“El derecho de petición y sus elementos estructurales

14. El derecho de petición está incorporado en el artículo 23 de la Constitución Colombiana de 1991, como aquel que permite “presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. Además, la disposición indica que el Legislador es quien puede reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Este derecho ha sido históricamente consagrado en diversos textos normativos y, según lo ha reconocido esta Corporación, es una pieza fundamental en el engranaje de nuestro Estado Social de Derecho. Recientemente la Ley Estatutaria 1755 de 2015 reguló su estructura general y principios. A su vez, está consagrado expresamente en el artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Derechos del Hombre, en los mismos términos que en el texto constitucional.
(...)

Según se estableció en las **sentencias C-818 de 2011 y C-951 de 2014**, los referidos elementos del núcleo esencial del derecho de petición pueden describirse de la siguiente manera:

(i) La **pronta resolución** constituye una obligación de las autoridades y los particulares de responder las solicitudes presentadas por las personas en el menor plazo posible, sin que se exceda el tiempo legal establecido para el efecto, esto es, por regla general, 15 días

¹ M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

hábiles. Para este Tribunal es claro que el referido lapso es un límite máximo para la respuesta y que, en todo caso, la petición puede ser solucionada con anterioridad al vencimiento de dicho interregno. Mientras ese plazo no expire el derecho no se verá afectado y no habrá lugar al uso de la acción de tutela.

*(ii) La **respuesta de fondo** hace referencia al deber que tienen las autoridades y los particulares de responder materialmente a las peticiones realizadas. Según esta Corte, para que no se vulnere el derecho fundamental de petición, la respuesta debe observar las siguientes condiciones: a) **claridad**, esto es que la misma sea inteligible y que contenga argumentos de fácil comprensión; b) **precisión**, de manera que la respuesta atienda directamente a lo solicitado por el ciudadano y que se excluya toda información impertinente y que conlleve a respuestas evasivas o elusivas; c) **congruencia**, que hace referencia a que la respuesta esté conforme con lo solicitado; y por último, d) **consecuencia** en relación con el trámite dentro del cual la solicitud es presentada, “de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”.*

*Ahora bien, este Tribunal ha aclarado que la resolución de la solicitud no implica otorgar lo pedido por el interesado, en tanto, **existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido**. En efecto, la **sentencia C-510 de 2004** indicó que “el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta. No se decide propiamente sobre él [materia de la petición], en cambio si se decide por ejemplo sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo invocado ante la administración para la adjudicación de un baldío, el registro de una marca, o el pago de una obligación a cargo de la administración”. Así, **el ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal**.*

*(iii) La **notificación de la decisión** atiende a la necesidad de poner al ciudadano en conocimiento de la decisión proferida por las autoridades, ya que lo contrario, implicaría la desprotección del derecho de petición. La notificación en estos casos, se traduce en la posibilidad de impugnar la respuesta correspondiente. Frente a este elemento del núcleo esencial de la petición, esta Corte ha explicado que es la administración o el particular quien tiene la carga probatoria de demostrar que notificó al solicitante su decisión, pues el conocimiento de ésta hace parte del intangible de ese derecho que no puede ser afectado (...).*

Conforme a la anterior jurisprudencia, a continuación, se abordarán de manera independiente las peticiones presentadas y referidas por la parte accionante, que este Despacho pudo extraer de la extensa documentación obrante en el expediente, y que únicamente tienen relación estrecha con lo referido por la demandante, esto es, la entrega de copias del procedimiento administrativo obrante en el IDU.

Peticiones No. 20215261582152 del 24 de septiembre de 2021 y No. 20215261687312 del 12 de octubre de 2021 que fueron atendidas por el IDU bajo el radicado No. 20213251632541 del 28 de octubre de 2021

Las referidas peticiones fueron formuladas en los siguientes términos:

2 SOLICITUDES RESPETUOSAS:

De la manera mas atenta solicitamos:

- 2.1. Ordenar al BANCO AGRARIO realizar el desembolso de los dineros originados por pago del precio de la indemnización, por la adquisición por expropiación de una parte del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40279765, en favor de la sociedad INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. – EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT 830.026.001-1 al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU. De conformidad con la orden de la resolución

1246 del 27 de marzo de 2019.

- 2.2. En caso de ser cierto el hecho No. 2.1, se nos vulneró el debido proceso y es un hecho que perjudica de manera patrimonial al Estado y a mi prohijada INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. – EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT 830.026.001-1; hecho que tendría repercusiones gravísimas, tanto disciplinarias como penales. Por lo tanto le rogamos de manera muy comedida, se sirva dar trámite a las mismas, no sin antes solicitar ordenar el pago inmediato a los dineros referidos.

5 SOLICITUDES RESPETUOSAS:

De la manera mas atenta solicitamos:

- 5.1 Ordenar al BANCO AGRARIO realizar el desembolso de los dineros originados por pago del precio de la indemnización, por la adquisición por expropiación de una parte del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40279765, en favor de la sociedad INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. – EN LIQUIDACION identificada con NIT 830.026.001-1 al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU. De conformidad con la orden de la resolución 1246 del 27 de marzo de 2019.
- 5.2 En caso de ser cierto el hecho No. 2.1, se nos entregue evidencia de la orden proferida INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, al Banco Agrario para el pago.
- 5.3 En caso de ser cierto el hecho No. 2.1, se nos vulneró el debido proceso y es un hecho que perjudica de manera patrimonial al Estado y a mi prohijada INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. – EN LIQUIDACION identificada con NIT 830.026.001-1; hecho que tendría repercusiones gravísimas, tanto disciplinarias como penales. Por lo tanto le rogamos de manera muy comedida, se sirva dar trámite a las mismas, no sin antes solicitar ordenar el pago inmediato a los dineros referidos.

Como resulta evidente, este Despacho encuentra que no es necesario realizar un mayor análisis sobre las referidas peticiones, considerando que la inconformidad de la parte accionante radica en la presunta omisión por parte del IDU en suministrarle copia del expediente administrativo en cuestión, o de alguna de sus actuaciones, empero que como se ilustró anteriormente, ello ni siquiera fue el objeto de esas solicitudes.

Las peticiones se formularon como una reclamación frente al pago del valor de la indemnización, al parecer, a un tercero sin autorización por parte del IDU, frente a lo cual la entidad, mediante el oficio No. 20213251632541 del 28 de octubre de 2021, le suministró a la accionante el fundamento o las razones de cómo se llevó a cabo dicho pago, sin que hasta esa fecha le haya sido requerida propiamente la entrega de alguna documentación, más allá del “memorando No. 20213250035033 de fecha 18/02/2021

con el cual se realiza la solicitud de entrega del depósito judicial” que la accionante entregó frente al numeral 5.2 de la solicitud.

Reunión del 25 de enero de 2022 celebrada entre INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, en virtud de la cual la parte accionante elevó una solicitud de copia del expediente administrativo

Frente a esta reunión sostenida entre las partes en controversia, se tiene que en la fecha mencionada se suscribió un acta en la que se consignó que la entidad accionada le suministró a la accionante la siguiente documentación:

| | |
|---|---|
| En este estado de la reunión, se hace entrega de copias simples de los siguientes documentos: | |
| 1. | Copia del acta de conciliación efectuada en el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral- Acta de Conciliación Virtual de fecha 27 de octubre de 2020. |
| 2. | Copia del Certificado de Cámara de Comercio de Bogotá con código de verificación 121029539DCFBD de fecha 19 de marzo de 2021 |
| 3. | Copia del poder especial otorgado al doctor CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, presuntamente por el señor MIGUEL GERMÁN ARANGO DE FEX |
| 4. | Copia del correo electrónico de fecha 9 de febrero de 2021 remitido por la señora YOLEIMA ARIAS, jefe de la sección de autenticaciones informa que los sellos y firmas del poder otorgado al señor CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, corresponden a la notaría |

(...)

| ANEXOS | | |
|--------|--|--------|
| No | Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia) | Folios |
| 1 | Copia del acta de conciliación efectuada en el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral- Acta de Conciliación Virtual de fecha 27 de octubre de 2020. | 1 |
| 2 | Copia del Certificado de Cámara de Comercio de Bogotá con código de verificación 121029539DCFBD de fecha 19 de marzo de 2021 | 3 |
| 3 | Copia del poder especial otorgado al doctor CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, presuntamente por el señor MIGUEL GERMÁN ARANGO DE FEX | 1 |
| 4 | Copia del correo electrónico de fecha 9 de febrero de 2021 remitido por la señora YOLEIMA ARIAS, jefe de la sección de autenticaciones informa que los sellos y firmas del poder otorgado al señor CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, corresponden a la Notaría. | 1 |
| 5 | Original de la declaración juramentada No 322 de fecha 24 de enero de 2022 | 1 |

Igualmente, en la referida acta se consignó la solicitud que elevó la apoderada de la parte accionante, en esta ocasión sí sobre la entrega de la totalidad del expediente, así:

| | |
|--|--|
| La doctora DIANA RUÍZ ARIZA haciendo uso del derecho de petición, solicita se le haga entrega de la totalidad de la documentación que reposa en el expediente en el que está involucrado la firma Inversora y promotora Gerona S.A en liquidación, así mismo aporta para que haga parte de la presente acta la declaración juramentada No 322 de fecha 24 de enero de 2022, en donde se aclara el punto No | |
| DESARROLLO | |
| 9, ya que el día de ayer desconocíamos el presunto poder mediante el cual se fundamenta el pago realizado. Así mismo se informa a los asistentes que nos encontramos en el proceso de verificación de los poderes ante las Notarías respectivas y el acta de conciliación ante el Ministerio de Justicia. | |
| CONCLUSIONES | |
| 1. Se dará trámite a la denuncia interpuesta y se responderá de fondo a la doctora Diana Ruíz Ariza respecto del trámite dado por parte de esta Subdirección General | |
| 2. Se dará traslado a la Dirección Técnica de Predios del Derecho de Petición instaurado por la doctora DIANA RUÍZ ARIZA, donde solicita copia de la totalidad del expediente en donde está involucrado la firma Inversora y promotora Gerona S.A en liquidación. | |
| 3. La presente acta se suscribe en dos (2) ejemplares originales | |


Así las cosas, este constitucional debe indicar que dentro del expediente no halló soporte alguno de que la referida solicitud de copias haya sido atendida por el IDU de manera oportuna o por lo menos anterior a la interposición de la acción de tutela, empero la cual manifestó y acreditó debidamente en su contestación dentro de este trámite constitucional, que el pasado 8 de abril de 2022, le suministró copia de la totalidad del expediente administrativo a la parte demandante, a través del radicado No. 20223250728231.

De manera que, conforme a la anterior jurisprudencia, encuentra este Despacho que, frente al primer requisito, esto es, la pronta resolución, el IDU emitió contestación a la petición de la accionante hasta el pasado 8 de abril de los corrientes, esto es, transcurridos más de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud (término para la petición de documentos), de lo cual se puede colegir que no fue oportuna.

No obstante, en cuanto el segundo requisito, esto es, una decisión de fondo, se tiene que con la respuesta emitida por la accionada se resolvió la petición de fondo (se respondió materialmente la petición), clara (inteligible y con argumentos de fácil comprensión), precisa (se atendió directamente a lo solicitado), congruente (la respuesta fue conforme con lo solicitado) y consecuente (con el trámite dentro del cual la solicitud fue presentada), sin que ello signifique la resolución favorable de lo reclamado, tal y como se ha definido en la jurisprudencia constitucional, porque como se anunció, de ningún modo la garantía del derecho tiene tal extensión; lo que ha sido ampliamente reiterado por la Corte Constitucional sin que exista discusión frente al tema, pues lo relevante es que se emita respuesta en los términos indicados.

Lo anterior, en la medida de que le proporcionó a la parte accionante la totalidad de las piezas que hacen parte del expediente administrativo, como así se consignó en el referido oficio en el que se plasmó además el recibido de la interesada:

BOGOTÁ



DTDP
20223250728231
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., abril 08 de 2022

Doctora:
DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA
Representante Legal
INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN
Correo: telealdia777@gmail.com
Cr. 70C No. 49-93
Bogotá D.C.

Se Recibe con la observación que no se han inspeccionado los copios de los folios. Ignoramos si es completo el expediente.
Manuel Castro.
08/04/2022

REF: Solicitud de copias expediente Administrativo.

Cordial Saludo,

La Dirección Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, en relación con el asunto de la referencia se permite anexar al presente escrito en 534 folios. (oficio a doble cara) copia de la totalidad del expediente administrativo del registro topográfico 46881A, tal y como se relacionan a continuación;

(...)

De igual forma, la citada documentación se enviará de forma digital al correo electrónico aportado telealdia777@gmail.com el cual puede ser consultado en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1NWqrWYfHtM-0kGGDjzMpxo2ntkKhUnl_?usp=sharing

Al respecto, para este Despacho es imperioso precisar que no son admisibles las manifestaciones hechas por la parte accionante mediante los memoriales del 11 y 18 de abril de 2022, respectivamente, en los que enunció o enumeró cada uno de los documentos que, según su dicho, no le fueron entregados por parte del IDU, por cuanto debe recordar que presentó una solicitud genérica de copias de la totalidad del expediente, sin que le haya especificado a la accionada cuáles eran las piezas que puntualmente requería, y mucho menos suministró prueba alguna de que dichas actuaciones sí hicieran parte del expediente, pero que, por ejemplo, por capricho o renuencia el IDU no haya querido suministrárselas.

Aunado a ello, debe puntualizarse que, se escapa del control de este juez constitucional que la totalidad de las copias entregadas no esté foliada de manera correcta, que se haya hecho con lápiz, que no se haya ordenado cronológicamente o que se hayan sustraído u ocultado piezas procesales, porque si de ello advierte irregularidad alguna la parte accionante, será ante la Fiscalía General de la Nación, que deberá ponerlo en conocimiento dentro de la misma investigación que se adelanta por los hechos que dieron origen al presente trámite de tutela o en su defecto ponerlo en conocimiento ante los entes disciplinarios correspondientes para que adopten las decisiones del caso, como la Personería Distrital y/o Procuraduría General de la Nación.

Por otra parte, frente a la última exigencia (notificación de la respuesta), se tiene que la accionada, en la misma fecha le entregó a la accionante dicha contestación o documentación, cuya recepción, por obvias razones, no se discute, ante los memoriales allegados a este Despacho los días 11 y 18 de abril de 2022, en los que la apoderada judicial manifestó su desacuerdo con la documental proporcionada.

En estos términos, para esta autoridad judicial, en el presente asunto se evidencia que se han superado los hechos que motivaron la interposición de la acción de tutela, pues si bien se presentó una demora injustificada por parte de la entidad accionada para emitir un pronunciamiento, se logró acreditar durante el transcurso del presente trámite, que adelantó las actuaciones pertinentes para poner en conocimiento de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN la respuesta a la petición objeto del presente trámite constitucional, esto es, le suministró las copias requeridas, subsanando de tajo, además cualquier vulneración al derecho fundamental al debido proceso.

Aunado a lo anterior, debe reiterarse que la parte accionante no precisó, si existe algún o algunos documentos específicos que no le fueron suministrados, y que se encuentran en poder del IDU, y por lo tanto se entiende de con la remisión que hiciera la accionada, ceso la vulneración al núcleo esencial del derecho reclamado como desconocido.

Por ende, en la medida de que el fin de la acción de tutela es la protección efectiva de los derechos fundamentales, cuando en el transcurso del trámite constitucional el derecho cuya protección se solicita deja de estar en peligro o cesa su vulneración, el juez de tutela debe abstenerse de emitir la orden de protección solicitada.

Sobre ello, la Honorable Corte Constitucional ha reconocido la existencia de un hecho superado y autoriza al juez de tutela para negar la protección sobre la base de que cualquier orden que se imparta para ofrecer el amparo requerido, es inocua:

“La carencia actual de objeto por hecho superado se constituye cuando lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sobrevienen hechos que demuestran que la vulneración a los derechos fundamentales ha cesado. La Corte ha entendido que el reclamo ha sido satisfecho, y, en consecuencia, la tutela pierde eficacia y razón, al extinguirse su objeto

jurídico resultando inocua cualquier orden judicial. Toda vez que ‘la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío’².

Conforme el criterio jurisprudencial antes expuesto, la carencia de objeto por hecho superado se presenta cuando se supera la vocación protectora que distingue a la acción de tutela como medio de amparo de derechos fundamentales, ello toda vez que la finalidad central a la cual se encuentra comprometida la acción consagrada en el artículo 86 superior, se extingue al momento en que la vulneración o amenaza cesa porque ha ocurrido el evento que configuraba tanto la reparación del derecho, como la solicitud al juez de amparo³.

En estos eventos no hay lugar a un pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada, por cuanto lo pretendido mediante la interposición de la acción constitucional fue satisfecho antes de la emisión de la orden judicial correspondiente.

En consecuencia, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la acción de tutela promovida por INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, a través de apoderada judicial, en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, sobre la garantía de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, de publicidad y de petición.

Por secretaría, se procederá a la notificación de este fallo con sujeción a lo previsto en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 y 5.º del Decreto reglamentario 306 de 1992; en el evento de no ser impugnada la decisión dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 - inciso 1.º - del Decreto 2591 de 1991; la actuación deberá ser remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO TREINTA Y DOS PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO dentro de la acción de tutela interpuesta por DIANA CRISTINA RUÍZ ARIZA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.916.910 y la T. P. No. 280.612 del CSJ, apoderada judicial de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, identificada con el NIT 830.026.001-1, en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, frente a sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, de publicidad y de petición, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR este proveído de conformidad con lo señalado en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 y 5.º del Decreto reglamentario 306 de 1992.

TERCERO: Contra la presente decisión procede la impugnación ante el superior jerárquico dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 - inciso 1.º - del Decreto 2591 de 1991. Si no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

² Corte Constitucional, Sentencia T-112 de 2010, M. P. Mauricio González Cuervo.

³ Corte Constitucional, Sentencia T-167 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.


JOHANA MARIBEL ROMERO BEJARANO
JUEZ

**IMPUGNAMOS
ACCIÓN DE TUTELA POR,
VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO,
DERECHO DE PETICIÓN
ARTICULO 32 DECRETO 1591 DE 1991**

**SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA DOCTORA
JUEZA DE AMPARO
JOHANA MARIBEL ROMERO BEJARANO
JUZGADO 32 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE
BOGOTÁ D.C.
j32pmcibt@cendoj.ramajudicial.gov.co**

Accionado:

*Instituto de Desarrollo
Urbano IDU*

Accionante:

**INVERSORAY PROMOTORA GERONA S.A.,
EN LIQUIDACIÓN, NIT. 830.026.001-1.**

**Apoderada: DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA
C.C. 40.916.910 Tp. 280612 C.S. de la J.**

telealdia777@gmail.com

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | ANTECEDENTES | 4 |
| 1.1 | EL ACCIONADO INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU- CONTESTÓ A LA ACCIÓN DE TUTELA CON AFIRMACIONES QUE NO SE AJUSTAN A LA REALIDAD DE LOS HECHOS | 4 |
| 1.2 | EL IDU, FALTÓ A LA VERDAD POR CUANTO INDICÓ QUE HECHO 1º NO ES CIERTO, CUANDO LA VERDAD ES QUE LA ENTIDAD PROFIRIÓ PARA EL PAGO LA RESOLUCIÓN 1246 DEL 2019, RAD: 20193250012466, RT. 46881. | 5 |
| 1.3 | LA ACCIONADA, FRENTE AL HECHO 2º, ADUJO QUE ES PARCIALMENTE CIERTO, Y FALTÓ A LA VERDAD. | 5 |
| 1.4 | FALTÓ A LA VERDAD EL IDU: COMO ACCIONANTES MANIFESTAMOS QUE EL HECHO 3º ES TOTALMENTE CIERTO, LA ACCIONADA MANIFESTÓ QUE ES PARCIALMENTE CIERTO | 6 |
| 1.5 | EL IDU CON DILACIONES INJUSTIFICADAS PRETENDIÓ IMPEDIR EL ATENDER DE FONDO LA SOLICITUD DE LA ACCIÓN DE TUTELA, LAS CUALES SON PRESUNTAS MANIOBRAS, , AL AFIRMAR QUE LOS HECHOS 4º Y 5º SON PARCIALMENTE CIERTOS. | 6 |
| 1.6 | EL IDU, CON LA MERA RADICACIÓN DE UN ACTA DE CONCILIACION QUE REFIRIÓ, PRETENDIÓ JUSTIFICAR QUE ESTUVO DEBIDAMENTE TRAMITADA. NO DIJO LA VERDAD AL MANIFESTAR QUE EL HECHO 8º NO ES CIERTO..... | 7 |
| 1.6.1 | EL IDU, NO ADJUNTÓ AL EXPEDIENTE LAS DECLARACIONES JURAMENTADAS QUE HACEN CONSTAR QUE EL SEÑOR MIGUEL ARANGO DE FEX NO FIRMÓ EL FALSO PODER | 8 |
| 1.6.2 | ANEXAMOS EL ACTA DEL 25 DE ENERO DEL 2022, CON FIRMA DE LA FUNCIONARIA DEL IDU, Y RELACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA. | 8 |
| 1.6.3 | EL IDU JUSTIFICÓ LA NO VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADUCIENDO EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, Y ADEMÁS, SEÑALÓ QUE, BAJO EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE DE LOS PRESUNTOS DELINCUENTES ,ACEPTÓ EL ACTA DE CONCILIACIÓN COMO REEMPLAZO DE UN ORDEN DIRECTA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A EN LIQUIDACIÓN. | 8 |
| 1.7 | QUEDÓ PROBADA LA OMISION DEL IDU PARA VERIFICAR EL ACTA DE CONCILIACION ENCARTADA Y PARA DILUIR LA RESPONSABILIDAD , SOBRE EL HECHO 7º, SEÑALÓ QUE NO ES CIERTO | 9 |
| 1.8 | A TRAVES DE MULTIPLES DILACIONES EL IDU MANIFESTÓ QUE YA HABÍA ENTREGADO LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE Y HECHO 9º, PRECISÓ QUE NO ERA CIERTO. | 10 |
| 2 | LA SENTENCIA QUE IMPUGNAMOS NO VALORÓ LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN APORTADOS AL PROCESO NI LA HIPÓTESIS DE HECHO QUE SE PRESENTÓ CON BASE EN ESOS ELEMENTOS. | 13 |
| 2.1 | EL PROBLEMA JURÍDICO NO FUE RESUELTO | 13 |
| 2.2 | EL IDU PERMANECE, DE MANERA CAPRICHOSA OMITIENDO LA ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE SON PÚBLICOS | 13 |
| 3 | LA SENTENCIA QUE IMPUGNAMOS NO MOSTRÓ EJERCICIO INTERPRETATIVO CALIFICADO | 13 |
| 3.1 | POR CUANTO NO ES UN HECHO SUPERADO: EL IDU NO ENTREGÓ LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE | 13 |
| 3.2 | PRONTA RESOLUCIÓN- NO EXISTIÓ, EL IDU SE ENCUENTRA EN MORA DE CUMPLIR SU OBLIGACIÓN | 14 |
| 3.3 | LA SENTENCIA NO ATENDIÓ QUE PRESENTAMOS LISTADO DE DOCUMENTOSQUE REPOSAN EN EL IDU Y NO FUERON ALLEGADOS EN LA ENTREGA DEL 8 DE ABRIL AL EXPEDIENTE | 15 |
| 3.4 | EL IDU NO ALLEGÓ AL EXPEDIENTE LAS EVIDENCIAS DEL PAGO CON CHEQUE DE GERENCIA A VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO | 16 |
| 3.5 | NO VALORÓ QUE ADVERTIMOS ACERCA DE LOS DOCUMENTOS QUE POR EL MISMO OCULTAMIENTO IGNORAMOS QUE PUEDAN REPOSAR EN EL EXPEDIENTE | 16 |
| 3.6 | NO ADVIRTIÓ LOS DAÑOS CAUSADOS QUE POR EL HECHO DE OMITIR LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE, SON GRAVÍSIMOS..... | 16 |
| 3.7 | IGNORÓ QUE EL IDU FALTÓ AL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA,..... | 16 |
| 3.8 | YERRA LA SENTENCIA EN EL ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DE FONDO | 16 |
| 3.8.1 | EL IDU NO ENTREGÓ LA RESPUESTA DE FONDO | 16 |
| 3.8.2 | NO HUBO CLARIDAD EN EL EXPEDIENTE ENTREGADO POR EL IDU | 17 |
| 3.8.3 | LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE NO CUMPLIÓ CON EL REQUISITO DE PRECISIÓN | 18 |
| | Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jue ces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso . sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artícu los 277 y 249-251 Cp. | |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 3.8.4 | EL EXPEDIENTE ENTREGADO POR EL IDU NO CUMPLIÓ CON EL REQUISITO DE CONGRUENCIA.... | 18 |
| 3.8.5 | EL IDU NO ENTREGÓ EL ACTA DEL 25 DE ENERO DE 2022, NI SUS ANEXOS | 19 |
| 3.8.6 | LA CONSECUENCIA POR NO HABER EL IDU ENTREGADO LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ENCONTRAR DENTRO DEL EXPEDIENTE | 21 |
| 3.9 | YERRA LA SENTENCIA POR CUANTO NO ADVIRTIÓ QUE LA ACCIONADA PROFIRIÓ HECHOS NO CIERTOS QUE FUERON DEBATIDOS OPORTUNAMENTE POR LA ACCIONANTE | 21 |
| 3.9.1 | A PESAR QUE LA JUEZ DE AMPARO ENCONTRÓ QUE EL IDU EFECTIVAMENTE OMITIÓ INCLUIR LA PIEZA DE LA REUNIÓN ENTRE EL IDU Y LA COMPAÑÍA ACCIONANTE , EL 25 DE ENERO DE 2022 | 21 |
| 3.9.2 | LA PARTE ACCIONANTE ELEVÓ UNA SOLICITUD DE COPIA DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO..... | 21 |
| 3.9.3 | EN LA FECHA MENCIONADA SE SUSCRIBIÓ UN ACTA EN LA QUE SE CONSIGNÓ QUE LA ENTIDAD ACCIONADA LE SUMINISTRÓ A LA ACCIONANTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:..... | 21 |
| 3.9.4 | EN EL ACTA SE CONSIGNÓ LA SOLICITUD QUE ELEVÓ LA APODERADA DE LA PARTE ACCIONANTE, EN ESTA OCASIÓN SÍ SOBRE LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE, ASÍ:..... | 22 |
| 3.9.5 | LA SENTENCIA INDICÓ QUE DENTRO DEL EXPEDIENTE NO HALLÓ SOPORTE ALGUNO DE QUE LA REFERIDA SOLICITUD DE COPIAS HAYA SIDO ATENDIDA POR EL IDU DE MANERA OPORTUNA O POR LO MENOS ANTERIOR A LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA..... | 22 |
| 3.9.6 | QUE EL IDU MANIFESTÓ Y ACREDITÓ DEBIDAMENTE EN SU CONTESTACIÓN DENTRO DE ESTE TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE EL PASADO 8 DE ABRIL DE 2022, LE SUMINISTRÓ COPIA DE LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO A LA PARTE DEMANDANTE, A TRAVÉS DEL RADICADO No. 20223250728231..... | 22 |
| 3.9.7 | MANIFESTÓ LA SENTENCIA QUE LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE NO FUE OPORTUNA, EN RAZÓN A QUE EL IDU EMITIÓ CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN DE LA ACCIONANTE HASTA EL PASADO 8 DE ABRIL DE LOS CORRIENTES, ESTO ES, TRANSCURRIDOS MÁS DE 20 DÍAS HÁBILES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD (TÉRMINO PARA LA PETICIÓN DE DOCUMENTOS), DE LO CUAL SE PUEDE COLEGIR QUE NO FUE OPORTUNA..... | 22 |
| 3.9.8 | LA SENTENCIA NO ADVIRTIÓ QUE LA ACCIONANTE NUNCA ADMITIÓ QUE RECIBIÓ LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO..... | 23 |
| 3.9.9 | LA SENTENCIA NO ADVIRTIÓ, QUE EL EXPEDIENTE DIGITAL QUE ENVIÓ EL IDU ES UN PRESUNTO ENGAÑO AL PROCESO, HAY FALTA DE LEALTAD PROCESAL POR PARTE DEL IDU..... | 23 |
| 3.9.10 | LA SENTENCIA RECONOCIÓ QUE LA ACCIONANTE LOS DÍAS 11 Y 18 DE ABRIL D 2022, ENUNCIÓ O ENUMERÓ LOS DOCUMENTOS QUE NO LE FUERON ENTREGADOS POR EL IDU..... | 24 |
| 3.9.11 | LA SENTENCIA RENUNCIÓ A ADMITIR LOS RECLAMOS RESPECTO A LAS PIEZAS FALTANTES EN EL EXPEDIENTE | 24 |
| 3.9.12 | LA SENTENCIA EXIGIÓ PRUEBA QUE LAS ACTUACIONES FALTANTES HACIAN PARTE DEL EXPEDIENTE | 24 |
| 3.9.13 | LA SENTENCIA PROVEYÓ QUE SE ESCAPA DEL CONTROL DE ESTE JUEZ CONSTITUCIONAL: LA FOLIACION CORRECTA DE LAS COPIAS, EL ORDEN CRONOLOGICO, LA SUSTRACCION Y /U OCULTAMIENTO DE LAS MISMAS | 24 |
| 3.9.14 | LA SENTENCIA ADUJO QUE ERAN: LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LA PERSONERÍA DISTRITAL Y/O PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LOS LLAMADOS A CONOCER EL ASUNTO, SI LA ACCIONANTE LO CONSIDERABA | 24 |
| 3.9.15 | LA SENTENCIA DIO POR NOTIFICADA LA RESPUESTA, Y RECONOCIÓ EL DESACUERDO DE LA ACCIONANTE FRENTE A DICHA CONTESTACIÓN, EN LAS MANIFESTACIONES QUE REALIZÓ LOS DÍAS 11 Y 18 DE ABRIL DE 2021 | 24 |
| 3.10 | LA SENTENCIA NO ADVIRTIÓ QUE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA ACCIONANTE SIGUEN VULNERADOS..... | 25 |
| 3.10.1 | LA SENTENCIA OMITIÓ VALORAR LA BUENA FE CON LA QUE ACTÚA LA ACCIONANTE. ART. 83 CN 25 | |
| 3.10.2 | LA SENTENCIA NO RECONOCIÓ EL CÚMULO DE JUSTIFICACIONES QUE LA ACCIONANTE MANIFESTÓ CON PRUEBAS A LOS ESCRITOS DEL 11 Y 18 DE ABRIL PARA SOLICITAR LOS FOLIOS FALTANTES (SENTENCIA 305 DE 2013 CORTE CONSTITUCIONAL) | 25 |
| 3.10.3 | LA SENTENCIA NO ADVIRTIÓ QUE LA IRREGULAR FORMA EN QUE LA ACCIONADA ENTREGÓ EL EXPEDIENTE CONTINÚA VIOLANDO EL AMPARO SOLICITADO | 25 |
| 4 | <u>POR LAS RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, NO EXISTE HECHO SUPERADO ALGUNO.....</u> | 26 |
| 4.1 | POR LA RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO, SE EVIDENCIA QUE NO SE HAN SUPERADO LOS HECHOS VULNERADORES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE INVERSORA Y PROMOTORA GERONA SA EN LIQUIDACIÓN | 26 |

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jue ces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso . sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artícu los 277 y 249-251 Cp.

| | | |
|-----|---|----|
| 4.2 | NO SE LOGRÓ ACREDITAR DURANTE EL TRÁMITE LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE COMPLETO QUE REPOSA EN EL IDU Y QUE CONTIENE LOS DOCUMENTOS REFERENTE A LA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA, RESOLUCIÓN 1246 DEL 27 DE MARZO DE 2019 RAD. 20193250012466 RT. 46881 A..... | 26 |
| 4.3 | EL IDU NO SUMINISTRÓ LA TOTALIDAD DE COPIAS REQUERIDAS, Y NO SUBSANÓ DE TAJO, LA VULNERACION DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, A LA PUBLICIDAD Y A LA DEFENSA, SIGUEN SIENDO VULNERADOS LOS DERECHOS IMPLORADOS..... | 26 |
| 4.4 | LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA NO ADVIRTIERON QUE LA ACCIONANTE PRECISÓ, A LA JUEZ DE AMPARO DE MANERA TAXATIVA LOS DOCUMENTOS ESPECÍFICOS QUE NO FUERON ENTREGADOS..... | 26 |
| 4.5 | NO CESÓ LA VULNERACIÓN AL NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO RECLAMADO. LA ACCIONADA CONTINUA EN PELIGRO DE VULNERACIÓN Y EL JUEZ DE TUTELA, RESPETUOSAMENTE DEBE EMITIR LA ORDEN DE PROTECCIÓN SOLICITADA. | 27 |
| 5 | <u>SOLICITAMOS MUY COMEDIDAMENTE SE REVOQUE EN SU TOTALIDAD LA SENTENCIA PROFERIDA.....</u> | 27 |
| 6 | <u>SOLICITAMOS AL JUEZ DE AMPARO ORDENE AL IDU CUMPLIR LA SOLICITUD PRESENTADA EN LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA.....</u> | 27 |
| 6.1 | SE ORDENE A LA ENTIDAD ACCIONADA, ENTREGAR LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN EL NUMERAL 4º DEL PRESENTE ESCRITO. | 27 |
| 6.2 | QUE EL IDU DE FOLIACIÓN ADECUADA Y CLARIDAD RESPECTO A LOS FOLIOS 450- 499, DEL LIBRO 2º , LOS CUALES SE REPITIERON. | 28 |
| 6.3 | NOTA QUE SE LE ADVIERTA AL IDU, QUE ES UNA ENTIDAD DEL ESTADO OBLIGADA A ATENDER LAS EXIGENCIAS PARA ARCHIVO Y FOLIACIÓN DOCUMENTAL DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. | 28 |
| 6.4 | QUE SE ORDENE AL IDU A CUMPLIR CON EL MANDATO LEGAL, EN RAZÓN A QUE ESTÁ OBLIGADA A ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTAL SOLICITADA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 594 DE 2000, ARTÍCULO 27..... | 28 |
| 7 | <u>PRUEBAS</u> | 28 |
| 7.1 | ANEXAMOS EL PRESENTE MEMORIAL..... | 29 |

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jue ces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso . sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artícu los 277 y 249-251 Cp.

Bogotá abril 3 de 2022

Señor(a)

Jueza de Amparo

JOHANA MARIBEL ROMERO BEJARANO

JUZGADO 32 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C.

j32pmcbt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: IMPUGNAMOS LA SENTENCIA DE TUTELA PROFERIDA EL 27 DE ABRIL DE 2022

ACCIÓN DE TUTELA 11001-40-09-032-2022-00045-00

Respetada señora Jueza:

De la manera mas respetuosa IMPUGNAMOS LA TOTALIDAD DE LA SENTENCIA DE TUTELA PROFERIDA EL 27 DE ABRIL DE 2022 y solicitamos ante su honorable despacho que se dé el trámite artículo 32 decreto 1591 de 1991, y en su lugar se conceda a la accionante el amparo solicitado.

1 ANTECEDENTES

La accionada dio contestación al escrito de tutela, con afirmaciones fuera de la verdad, ante las cuales nos manifestamos en aras de no subsanar en manera alguna tales conjeturas.

1.1 EL ACCIONADO INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDUⁱ- CONTESTÓ A LA ACCIÓN DE TUTELA CON AFIRMACIONES QUE NO SE AJUSTAN A LA REALIDAD DE LOS HECHOS

Mediante escrito allegado a través de correo electrónico, Carlos Francisco Ramírez Cárdenas, en su calidad de Director Técnico de Gestión Judicial del IDU, dio contestación.

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. Sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

El IDU, se refirió a los hechos consignados en el escrito de tutela, con afirmaciones que no son ciertas.

| Reza la contestación del accionado | Reza en el hecho 1º del escrito de tutela |
|--|--|
| no es cierto ya que mediante la Resolución No. 1246 del 27 de marzo de 2019, la entidad accionada ordenó la expropiación administrativa de una zona de terreno que hace parte del predio identificado con el registro topográfico. 46881ª y el folio de matrícula 50S-40279765, . | El día 27 de marzo de 2019 el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, en razón a la expropiación por vía administrativa parcial, sobre una zona de terreno de 3330.81 m2, con matrícula inmobiliaria 50S-40279765, profirió para el pago la resolución 1246 del 2019, rad: 20193250012466, RT. 46881, |
| <div>Resolución del IDU</div> <div>ARTICULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía administrativa en favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU identificado con el NIT 899.999.081-6 de una Zona de terreno que forma parte de un inmueble de mayor extensión ubicado en la KR 89C 34 20 SUR de la ciudad de Bogotá D.C., con un área de 3.330,81 M2 de terrgno e identificado con la cédula catastral No. 105218320200000000 en mayor extensión, CHIP No. AAA0139KWEF en mayor extensión y matrícula inmobiliaria No. 050S40279765 en mayor extensión, conforme el registro topográfico No. 46881 A, elaborado por La Dirección Técnica De Predios en el mes de Agosto de 2017, dirigida a la sociedad INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A- EN LIQUIDACION identificada con NIT 830026001-1, en su condición de titular derecho real de</div> | |

1.2 El IDU, faltó a la verdad por cuanto indicó que hecho 1º no es cierto, cuando la verdad es que la entidad profirió para el pago la resolución 1246 del 2019, rad: 20193250012466, RT. 46881.

La accionante presentó un hecho completamente cierto, lamentablemente ahora el IDU pretende desvirtuar un hecho expresamente demostrado en una resolución que ella misma profirió.

Folios 391 R -397 R del libro 2 del expediente que entregó IDU el día 8 de abril de 2022

1.3 La accionada, frente al hecho 2º, adujo que es parcialmente cierto, Y FALTÓ A LA VERDAD.

El IDU debe pagar, la resolución ordenó el pago de la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$2.443.648.757) MONEDA CORRIENTE, Folios 395R del libro 2 del expediente que entregó IDU el día 8 de abril de 2022.


| Reza la contestación del accionado | Reza el hecho 2º del escrito de tutela |
|--|---|
| “(…) toda vez que en ese acto administrativo se ordenó el pago como precio indemnizatorio como consecuencia de la expropiación administrativa, el cual se puso a disposición del Juzgado 12 Civil de Circuito de Bogotá, en ¡Atención! a que se encontraba vigente inscripción de demanda en proceso ordinario registrado en la anotación No. 9 del folio de matrícula inmobiliaria SOS-40279765, de Vivienda Social Colombiana Ltda. radicada mediante oficio No. 661 del 15 de marzo del 2002, inscripción ordenada por esa autoridad judicial.(…) | La resolución ordenó el pago de la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$2.443.648.757) MONEDA CORRIENTE, menos los descuentos que por ley se debieran realizar; ordenó que enviaran el dinero; en primera instancia envió el título judicial a órdenes del juzgado 12 C. del Cto, a fin de dar trámite financiero a una demanda inscrita de Visocol contra Constructora y Promotora BCP Ltda. en Liquidación, esto, desde el 15 de marzo del año 2002, y que si no era cobrado diez días después, el juzgado lo debería regresar a la entidad bancaria. (Art. 3º de la resolución). El día 13 de enero de 2021, el juzgado 12 C. del Cto, ordenó convertir todo el dinero al Banco Agrario, por cuanto INVERSORA Y PROMOTORA GERONA no era parte alguna el proceso referido. |

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jue ces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso . sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artícu los 277 y 249-251 Cp.

| | |
|--|---|
| <p>ARTÍCULO SEGUNDO: EL VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO es la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$2.443.648.757) MONEDA CORRIENTE. El citado valor comprende: A) La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS (\$ 2.431.491.300) MONEDA CORRIENTE, por concepto de avalúo comercial de terreno. B) La suma de DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$12.157.457) MONEDA CORRIENTE por concepto de indemnización Daño Emergente, de conformidad</p> | <p>ARTICULO TERCERO.- FORMA DE PAGO.- El trámite de pago se efectuará por la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, previa autorización expresa y escrita de la Dirección Técnica de Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago así: un cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, ósea la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$2.443.648.757) MONEDA CORRIENTE, que</p> |
|--|---|

1.4 Faltó a la verdad el IDU: como accionantes manifestamos que el hecho 3º ES TOTALMENTE CIERTO, la accionada manifestó que es parcialmente cierto

Folios 494-495 del libro 2 del expediente que entregó IDU el día 8 de abril de 2022. ¡Atención! como quiera que en el expediente que recibimos existen dos folios con la misma numeración separados por cien folios, se presta a confusión, para mayor claridad, buscar folios 361 al 363 del PDF

| Reza la contestación del accionado | Reza el hecho 3º del escrito de tutela |
|--|---|
| indicó que es parcialmente cierto sobre el pago que se realizó al señor Víctor Hugo Jiménez Castro, con fundamento en la solicitud realizada mediante radicado No. 20215260129932 del 27/01/2021, por la abogada Dorys Eugenia Álvarez Garzón, en calidad de apoderada del señor Víctor Hugo Jiménez Castro, quien elevó la petición a la Dirección Técnica de Predios del IDU, solicitando endosar y autorizar el pago del depósito judicial No. 400100007338617, a nombre de Jiménez Castro. | El día 24 de septiembre de 2021, la empresa beneficiaria del título, aquí accionante, a través de su apoderada se remitió al Banco Agrario con el fin de que éste realizara el desembolso, el banco le informó que el título ya había sido pagado a un sujeto llamado VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO C.C. 4.318.158. Que había sido pagado por orden del IDU. Presentamos el reclamo en el IDU, el mismo día 24 de septiembre de 2021. Radicado N° 20215261582152. |
| Derecho de petición de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA SA EN LIQUIDACIÓN | |
| <p>Bogotá, Septiembre 24 de 2021</p> <p>Señores:</p> <p>SUBDIRECCION TECNICA TESORERIA Y RECAUDO IDU</p> <p>REFERENCIA: COBRO DEL DEPÓSITO JUDICIAL A INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.S. EN LIQUIDACIÓN. NIT. 830.026.001-1 RESOLUCIÓN: 1246 del 27 de marzo de 2019 RAD: 20193250012466</p>  | <p>2 Como apoderada de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.S. EN LIQUIDACIÓN. NIT. 830.026.001-1, propietarios del título, nos dirigimos al Banco Agrario a solicitar el reembolso y nos comunicaron que ya habían sido pagados:</p> <p>2.1 Al señor , VICTOR HUGO JUMENEZ CASTRO identificado con Cédula de ciudadanía numero 4.318.158, que al sujeto se le pagó por orden del IDU y que se realizó mediante cheque de gerencia.</p> <p>2.2 La información me la dio el cajero de Banco Agrario sede Depósitos Judiciales, calle 13 No. 8-18 Bogotá D.C.</p> |

1.5 El IDU con dilaciones injustificadas pretendió impedir el atender de fondo la solicitud de la acción de tutela, las cuales son presuntas maniobras, ,al afirmar que los hechos 4º y 5º son parcialmente ciertos.

Las dilaciones injustificadas del IDU para impedir atender de fondo la solicitud de la acción de tutela son expresas, nos detenemos en analizarlas .

ES CIERTO, que el IDU justificó a través de MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO el pago del dinero de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA, a VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, porque la doctora “DORYS EUGENIA ÁLVAREZ GARZÓN”, lo solicitó.

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jue ces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso . sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artícu los 277 y 249-251 Cp.

Folio 485R del libro 2 del expediente que entregó IDU el día 8 de abril de 2022. ¡Atención! como quiera que en el expediente que recibimos existen dos folios con la misma numeración separados por cien folios, se presta a confusión, para mayor claridad, buscar folio 440 del PDF

| | |
|--|---|
| Reza la contestación del accionado | Rezan los hechos 4º y 5º del escrito de tutela |
| pues la petición fue realizada mediante radicado No. 20215261687312 del 12/10/2021, y no del día siguiente, a la cual se dio respuesta mediante el radicado No. 20213251632541 del 28/10/2021, en la que no se justificó el pago, sino que se informó cómo éste se realizó con fundamento en la solicitud realizada mediante radicado No. 20215260129932 del 27/01/2021 por la doctora Dorys Eugenia Álvarez Garzón en calidad de apoderada del señor Víctor Hugo Jiménez Castro, quien realizó la petición a la Dirección Técnica de Predios del IDU de endosar y autorizar el pago del depósito judicial No. 400100007338617, a nombre de aquel. | 1.4 El día, 13 de octubre de 2021, presentamos un nuevo derecho de petición a nombre del director del IDU doctor Diego Sánchez Fonseca. Solicitando el pago. 1.5 El día 28 de octubre de 2021, María Del Pilar Grajales Restrepo, Directora Técnica de Predios, en asocio con Marcela Zuluaga Franco, dio contestación a los dos derechos de petición con una absurda justificación y profirió que el dinero le fue entregado al señor VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, presunto delincuente. |
| Derecho de petición de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA SA EN LIQUIDACIÓN le , el IDU justificó el pago al presunto delincuente | |
| <div><p>No. 20216281887312 de 13/10/2021 3:03:53 p.m. Remite: (OEM) INVERSORA Y PROMOTORA GERONA Dep.: Dirección Técnica de Predios Anexos: 5 FOLIOS Tr: Derechos de petición</p></div> <p>Mediante radicado IDU No. 20215260129932 de fecha 27/01/2021, la doctora DORYS EUGENIA ALVAREZ GARZÓN en calidad de apoderada del señor VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, realizo la petición a la Dirección Técnica de Predios del IDU, de endosar y autorizar el pago del depósito judicial No. 400100007338617, a nombre del señor VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO esta solicitud la realiza aportando los siguientes documentos:</p> | |

1.6 El IDU, con la mera radicación de un acta de conciliacion que refirió, pretendió justificar que estuvo debidamente tramitada. No dijo la verdad al manifestar que el hecho 8º no es cierto.

Es evidente, real y no subsanamos las afirmaciones del IDU.

RAZONES:

Es absurdo que el IDU quiera imponer ante la justicia y la accionante y víctima, el pago de la expropiación administrativa a un tercero desconocido justificándolo con un acta de conciliación virtual; el corrupto documento fue una fotocopia sin anexos ni evidencia alguna de autorización de endoso por parte de la beneficiaria del título, tampoco Juez alguno de la república ordenó mandamiento de pago a la susodicha y encartada acta, para que se le entregara la totalidad del dinero de la resolución subjudice, que ya bajo juramento el representante legal de la compañía declaró no haber firmado autorización alguna ni poder alguno al presunto abogado delincuente.

Para justificarlo presentó una constancia de radicación del acta que refirió, eso no significa que esté debidamente tramitada la audiencia de conciliación. Por tal motivo el MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, abrió investigación al referido centro de Conciliación.

| | |
|--|---|
| Reza la contestación del accionado | Reza el hecho 8º del escrito de tutela |
| “(…)e hizo énfasis en que el Ministerio de Justicia y del Derecho envió al IDU un oficio donde manifestó que “el Acta que fue registrada ante el Ministerio de Justicia y del Derecho de acuerdo al código del centro 1455, numero del caso en el centro: 363 de fecha 22 de octubre del 2020. | El IDU ejerció instrucción, al hacer efectivo el pago con la mera presentación del “Acta Virtual de Conciliación”, omitió atender la ley que regula los efectos del acuerdo conciliatorio, cuya acta únicamente presta mérito ejecutivo. (Artículo 66 Ley 446 de 1998). Y bien es sabido que un proceso |

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jue ces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso . sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artícu los 277 y 249-251 Cp.

| | |
|--|---|
| Cuantía indeterminada fecha de resultado el 27 de octubre del 2020, identificador Nacional de SICAAC, caso No. 1468705, Resultado No. 1371667, conciliador el Dr. EDUARDO GRILLO OCAMPO identificado con cédula de ciudadanía No. 19140588”. | ejecutivo se adelanta en jurisdicción civil, ante un Juez y no es un documento intercambiable ante una pagador. |
|--|---|

1.6.1 El IDU, no adjuntó al expediente las declaraciones juramentadas que hacen constar que el señor Miguel Arango De Fex no firmó el falso poder

No le consta, por cuanto omitieron agregar al expediente, amputaron la pieza que debió ser agregada: la audiencia del 25 de enero del 2022, en la cual MIGUEL ARANGO DE FEX, declaró a la subdirectora del IDU, que nunca firmó el pasquín presentado por la funcionaria para justificar que el representante legal de la compañía había ordenado a CARLOS ADNER VIVERO DIAZ que lo representara en la fraudulenta audiencia de conciliación.

Es ridícula la justificación, y mas proviniendo de un profesional del derecho, no tiene asidero. En pleno siglo XXI, con las tecnologías biométricas, el internet, los teléfonos celulares, el IDU omitió verificar la identidad de los presuntos delincuentes, no atendió a las órdenes del Juez 12 C. del Cto. no atendió a la ley que exige un determinado trámite para le entrega de los dineros para el pago de las expropiaciones administrativas... etc. , y al agregar que no le CONSTA MIGUEL ARANGO DE FEX no firmó el poder, únicamente ratifica su omisión de cuidado de los dineros PÚBLICOS.

1.6.2 Anexamos el acta del 25 de enero del 2022, con firma de la funcionaria del IDU, y relación de la declaración juramentada.

| | |
|---|---|
| Reza la contestación del accionado | Reza el hecho 8° del escrito de tutela |
| “(…)Puesto que la accionada fue receptora de unos documentos aportados mediante radicado No. 20215260129932 del 27/01/2021 por la Dorys Eugenia Álvarez Garzón a través de los cuales se demostraba una conciliación debidamente registrada en un centro de conciliación facultada para tal fin.” | El IDU ejerció instrucción, al hacer efectivo el pago con la mera presentación del “Acta Virtual de Conciliación”, omitió atender la ley que regula los efectos del acuerdo conciliatorio, cuya acta únicamente presta mérito ejecutivo. (Artículo 66 Ley 446 de 1998). Y bien es sabido que un proceso ejecutivo se adelanta en jurisdicción civil, ante un Juez y no es un documento intercambiable ante una pagador. |
| acta del 25 de enero del 2022, con firma de la funcionaria del IDU, y relación de la declaración juramentada. | |
| | |
| | |

1.6.3 El IDU justificó la no validación de los documentos aduciendo el principio de la buena fe, y además, señaló que, bajo el principio de la buena fe de los presuntos delincuentes ,aceptó el

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jue ces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso . sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artícu los 277 y 249-251 Cp.

acta de conciliación como reemplazo de un orden directa del representante legal de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A EN LIQUIDACIÓN.

La buena fe debe ser probada, por lo tanto, el IDU debió probar la buena fe de los presuntos delincuentes. Hubo omisión del IDU e irresponsabilidad, no es cierto, no realizó una debida verificación; del asunto, la accionada, tendrá que explicar y desentrañar los hechos para justificar las maniobras que realizó el entramado criminal que culminó apropiándose del dinero que el IDU debe a INVERSORA Y PROMOTORA GERONA SA. EN LIQUIDACIÓN.

Basta con leer el expediente mutilado que entregó el IDU a la accionante, allí se pueden advertir las maniobras y el que, en manera alguna, el IDU pagó el dinero que debe a INVERSORA Y PROMOTORA GERONA SA. EN LIQUIDACIÓN.

Además es irresponsable por parte de la accionada que manifieste: "(...)quien tenía la carga de confirmar si ese poder era o no auténtico y veraz, era el Centro de Conciliación que fue en donde se llevó a cabo la audiencia de conciliación(...)".

Es inadmisibile, que de semejante respuesta para justificar su omisión. Total, con una fotocopia de un acta de conciliación, actualmente investigada, se sirva justificar la indebida custodia de los bienes del Estado.

| Reza la contestación del accionado | Respecto al hecho 8º del escrito de tutela |
|--|--|
| Los documentos aportados a la entidad por la parte solicitante se presumen de veracidad y autenticidad de su contenido, aunque el IDU en aplicación a la política de la diligencia debida verificó la autenticidad del poder aportado ante la Notaria que lo autenticó. “(…)quien tenía la carga de confirmar si ese poder era o no auténtico y veraz, era el Centro de Conciliación que fue en donde se llevó a cabo la audiencia de conciliación(...)”. | A pesar de la naturaleza del expediente, se pueden advertir en el contenido de los folios, los innumerables actos de omisión por parte de los funcionarios obligados, para verificar y proteger el patrimonio del ESTADO. https://drive.google.com/file/d/1S9S9TCBKt1w6eJbx9wRc4YkHUxH4_zd/view?usp=sharing |

1.7 Quedó probada la omision del IDU para verificar el acta de conciliacion encartada y para diluir la responsabilidad , sobre el hecho 7º, señaló que no es cierto

La esta misma contestación el IDU, se contradice, primero no reposan evidencias de los anexos del acta de conciliación, dice el accionado que debió verificarlos el MINISTERIO DE JUSTICIA, quedó probado que el poder que después pretendieron incorporar al acta encantada, no es un documento auténtico, el contenido del acta nunca expresa orden alguna de Gerona para endosar dinero alguno a persona alguna.

El IDU, de manera irresponsable jamás solicitó los anexos, ni conoció a MIGUEL ARANGO DE FEX, ni lo buscó, se sometió a obedecerle a la presunta delincuente “DORYS EUGENIA ÁLVAREZ GARZÓN”, y así entregó el dinero. De manera grosera envió a la suscrita apoderada de la propietaria del dinero a buscar unos documentos que deben reposar en el expediente.

El IDU, Omitió el deber de cuidar el dinero del ESTADO.

Folio 466R del libro 2 del expediente que entregó IDU el día 8 de abril de 2022. **¡Atención!** como quiera que en el expediente que recibimos existen dos folios con la misma numeración separados por cien folios, se presta a confusión, para mayor claridad, buscar folio 4402 del PDF

| Reza la contestación del accionado | Respecto al hecho 7º del escrito de tutela |
|--|---|
| “(…) toda vez que junto con la respuesta se adjuntaron los documentos que fueron radicados por Dorys Eugenia Álvarez Garzón en calidad de apoderada de Víctor Hugo Jiménez Castro, así como se le informó a la parte tutelante que si requería otros documentos tenía que solicitarlos al Ministerio de Justicia y del Derecho en calidad de parte del | Los únicos documentos que anexó la funcionaria fueron: una fotocopia del acta de conciliación sin anexo alguno y copia de un memorando en el que MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, Directora Técnica de Predios IDU, ordenó a DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO, Subdirectora Técnica |

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jue ces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso . sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artícu los 277 y 249-251 Cp.

| | |
|--|---|
| <p>proceso, ya que es en esa entidad en donde se registraron los documentos junto con el acta de conciliación.(...)”</p> <p>Manifestó que la conciliación presentada:</p> <p>Reunía los requisitos legales</p> <p>Era un documento autentico</p> <p>Hacía tránsito a cosa juzgada</p> | <p>de Tesorería y Recaudo, IDU, hacer el cheque a nombre de VICTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, por cuanto una mujer llamada DORYS EUGENIA ÁLVAREZ GARZÓN, lo solicitó.</p> |
| <p>Nótese que el único anexo es el acta de conciliación.</p> <p>Mediante radicado IDU No. 20215260129932 de fecha 27/01/2021, la doctora DORYS EUGENIA ALVAREZ GARZÓN en calidad de apoderada del señor VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, realizo la petición a la Dirección Técnica de Predios del IDU, de endosar y autorizar el pago del depósito judicial No. 400100007338617, a nombre del señor VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO esta solicitud la realiza aportando los siguientes documentos:</p> | <ul style="list-style-type: none">• Acta de conciliación que se llevó acabo en el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral el día 27 de octubre del 2020, "Fundación de Derecho y Equidad" autorizada mediante Resolución 0167 del 15 de febrero• Acta de conciliación que se llevó acabo en el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral el día 27 de octubre del 2020, "Fundación de Derecho y Equidad" autorizada mediante Resolución 0167 del 15 de febrero del 2018 por el Ministerio de Justicia y del Derecho Acta que fue registrada ante el Ministerio de Justicia y del Derecho de acuerdo al código del centro 1455, numero del caso en el centro: 363 de fecha 22 de octubre del 2020. Cuantía indeterminada fecha de resultado el 27 de octubre del 2020, Identificador Nacional de SICAAC, caso No. 1468705, Resultado No. 1371667, conciliador el Dr. EDUARDO GRILLO OCAMPO identificado con cédula de ciudadanía No. 19140588. |
| <p>La vergonzosa justificación para determinar que el acta de conciliación debe surtir los requisitos</p> <p>Así las cosas, la Dirección Técnica de Predios del IDU, conforme lo anterior mente manifestado teniendo en cuenta que las actas de conciliación y teniendo en cuenta que presentan merito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada, esta entidad procedió actuar en derecho acatando una orden de realizar la conversión y entrega del depósito judicial No. 400100007338617, a nombre de la sociedad INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN a favor del señor VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO.</p> <p>indispensables para el pago:</p> | |

1.8 A traves de multiples dilaciones el IDU manifestó que ya había entregado la totalidad del expediente y hecho 9º, precisó que no era cierto.

Es lamentable que mediante afirmaciones no ciertas y, repetimos dilatorias, el IDU pretenda seguir ocultando las pruebas que demuestran que INVERSORA Y PROMOTORA GERONA SA EN LIQUIDACIÓN, no recibió el pago constitucional por la expropiación administrativa.

| |
|---|
| <p>Reza la contestación del accionado</p> <p>“(…)ya que la accionante solicitó inicialmente copia de la Resolución de expropiación mediante radicado No. 20225260259902 del 14/02/2022 y no copia del todo el expediente, solicitud a la que se le dio respuesta de fondo mediante radicado No. 20223250599691 del 25/03/2022.”</p> <p>No obstante, alegó que mediante los oficios DTDP 20223250728231 y 20225050729881 del 8 de abril de 2022, se le suministró a la parte accionante la totalidad del expediente.</p> <p>De otro lado, informó que una de las comunicaciones recibidas por la doctora Diana Cristina Ruíz Ariza, corresponde a la enviada mediante correo electrónico del 31 de enero de 2022 y radicada bajo el No. 20225260215212, la cual fue respondida mediante el oficio No. 20225050242111 del 8 de febrero de 2022; así como puso en conocimiento que la accionante remitió al correo electrónico de una funcionaria del IDU la solicitud calendada del 14 de febrero de 2022, la cual fue radicada en el sistema de archivo y correspondencia ORFEO bajo el No. 20225260652402, y que fue atendida mediante oficio No. 20225050729881.</p> <p>Además, respecto a los documentos citados por la accionante, indicó que éstos fueron entregados en el marco de la entrevista sostenida con los representantes de Gerona el día 25 de enero de 2022, de lo que se dejó un acta.</p> <p>Por último, informó que previo análisis de los soportes solicitados a las diferentes áreas del IDU responsables dentro del proceso de adquisición predial, se formuló denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, mediante oficio No. 20225050233601 del 7 de febrero de 2022, la cual cursa en la Fiscalía delegada No. 91 bajo el CUI 110016000050202256528.</p> <p>Conforme a lo anterior, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU consideró que no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la accionante, en consideración a que siempre ha contestado sus reiterativos requerimientos.</p> |
|---|

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jue ces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso . sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artícu los 277 y 249-251 Cp.

| | |
|---|--|
| Reza la contestación del accionado | Reza el hecho 9º del escrito de tutela |
| “(…)ya que la accionante solicitó inicialmente copia de la Resolución de expropiación mediante radicado No. 20225260259902 del 14/02/2022 y no copia del todo el expediente, solicitud a la que se le dio respuesta de fondo mediante radicado No. 20223250599691 del 25/03/2022.” | <p>No es cierto</p> <p>El IDU en manera alguna atendió las insistentes solicitudes de entregar INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A – EN LIQUIDACIÓN, N.I.T. 800.207.579-4 propietaria del título judicial, el expediente completo del proceso de la EXPROPIACIÓN del inmueble registrado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50S 40279765 asunto que nos ocupa. A pesar que se lo solicitamos desde el día 13 de octubre de 2021.</p> <p>1.9.1 DE MANERA VERBAL EN LAS INSTALACIONES DEL IDU SE EXCUSARON PORQUE SEGÚN LA FUNCIONARIA EL PROCESO YA ESTABA ARCHIVADO</p> <p>Desde octubre 13 de 2021 (En una reunión en las instalaciones del IDU con una funcionaria quien al parecer se llamaba MARCELA ZULUAGA, le realizamos la solicitud de todas las copias del proceso de expropiación del inmueble (Folio 137 del expediente elaborado por la accionante)</p> |
| A legó que mediante los oficios DTDp 20223250728231 y 20225050729881 del 8 de abril de 2022, se le suministró a la parte accionante la totalidad del expediente. | <p>No es cierto, como lo manifestamos al Juez de amparo, en el expediente no se encuentran gran cantidad de documentos que deben reposar en el mismo.</p> <p>Se pueden encontrar en el siguiente enlace</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1yWAddO2qiUrVAgZ_wcyWSQ3wszodTHUL?usp=sharing</p> |
| De otro lado, informó que una de las comunicaciones recibidas por la doctora Diana Cristina Ruíz Ariza, corresponde a la enviada mediante correo electrónico del 31 de enero de 2022 y radicada bajo el No. 20225260215212, la cual fue respondida mediante el oficio No. 20225050242111 del 8 de febrero de 2022 | <p>NO ES CIERTO</p> <p>Así lo hicimos saber en los escritos a las funcionarias encartadas:</p> <p>1.9.2 LA SUBDIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS, CONSIDERÓ PETICIONES OSCURAS Y REITERATIVAS EL QUE SOLICITÁRAMOS EL CONSTITUCIONAL PAGO Y ADEMÁS OMITIÓ EL ENTREGAR EL ARCHIVO COMPLETO DEL PROCESO</p> <p>1.9.3 El día febrero 14 de 2022 SOLICITAMOS EL EXPEDIENTE a MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO (Folio 245 del expediente elaborado por la accionante)</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1yWAddO2qiUrVAgZ_wcyWSQ3wszodTHUL?usp=sharing</p> |
| Que la “ accionante remitió al correo electrónico de una funcionaria del IDU la solicitud calendada del 14 de febrero de 2022, la cual fue radicada en el sistema de archivo y correspondencia ORFEO bajo el No. 20225260652402, y que fue atendida mediante oficio No. 20225050729881” | <p>¿De cuál funcionaria? NO HAY CLARIDAD EN LA CONTESTACIÓN</p> <p>El radicado ORFEO bajo el No. 20225260652402, es un irresponsable y sospechoso documento que la funcionaria envió el día 18 de abril de 2022, en términos para dictar sentencia de la presente acción de la tutela, y que presuntamente pretende subsanar el que la documentación que entregó Rosita Barrios Figueroa el día 25 de enero de 2022 siga oculta, no hace parte del expediente.</p> <p>Esa documental debe ser incorporada de manera íntegra al expediente entregado. Se advierte que sigue el ocultamiento de pruebas. En esta pieza quedó probada la mala fe del IDU, la indebida verificación de los documentos, la declaración juramentada de MIGUEL ARANGO DE FEX.</p> <p>El día 14 de febrero la suscrita accionante envió correos electrónicos a MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO Y A ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA.</p> <p>EN EL ESCRITO DE TUTELA LA ACCIONANTE MANIFESTÓ</p> <p>1.9.3 El día febrero 14 de 2022 SOLICITAMOS EL EXPEDIENTE a MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO(Folio 245 del expediente elaborado por la accionante)</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1rApMqkfWY4vY6q34zhPbN50HYNSt0Fk3/view?usp=sharing</p> <p>A LA SUBDIRECTORA DEL IDU, ROSITA ESTHER BARRIOS, TAMBIÉN LE SOLICITAMOS LA TOTALIDAD DEL PROCESO DESDE EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2022 Y NO DIO RESPUESTA ALGUNA (folio de 230 del expediente elaborado por la accionante)</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1rApMqkfWY4vY6q34zhPbN50HYNSt0Fk3/view?usp=sharing</p> <p>1.9.4 La funcionaria ROSITA ESTHER BARRIOS, subdirectora del IDU, ignoró la solicitud no dio respuesta alguna a la solicitud, a la fecha, y desde febrero 14 de 2022 la funcionaria no dio respuesta alguna al derecho de petición que incoamos.</p> |

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jue ces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso . sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artícu los 277 y 249-251 Cp.

| | |
|---|---|
| | <p>Cabe anotar que la referida funcionaria, el día 25 de enero de 2022, entregó únicamente el ilegible poder que nunca firmó el representante legal MIGUEL ARANGO DE FEX al abogado CARLOS ADNER VIVEROS DIAZ, acompañó a este papel una verificación manipulada: un correo a la notaría 7ª de Bogotá con un pdf adjunto, era de otro poder no del aquí referido. Una copia de la cámara de comercio de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA EN LIQUIDACIÓN, y después, el día 28 de enero de 2022, de manera mentirosa afirmó que entregó una solicitud de verificación a la notaría 4ª de Bogotá.</p> <p>1.9.5 MIGUEL ARANGO DE FEX, declaró bajo juramento que no conoce al abogado CARLOS ADNER VIVEROS DIAZ, que jamás firmó el poder que presentó el IDU y que la firma del poder entregado por el IDU no es suya. FOLIOS (fols. 201-204 del expediente elaborado por la apoderada accionante).</p> |
| Además, respecto a los documentos citados por la accionante, indicó que éstos fueron entregados en el marco de la entrevista sostenida con los representantes de Gerona el día 25 de enero de 2022, de lo que se dejó un acta. | <p>¿Si fueron entregados porque no se adjuntan al expediente?</p> <p>Manifiesta el IDU de manera expresa su expreso ocultamiento de folios. No se encontró dentro del expediente entregado por el IDU el día 8 de Abril de 2022, ni un solo folio de los referidos.</p> |
| Por último, informó que previo análisis de los soportes solicitados a las diferentes áreas del IDU responsables dentro del proceso de adquisición predial, se formuló denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, mediante oficio No. 20225050233601 del 7 de febrero de 2022, la cual cursa en la Fiscalía delegada No. 91 bajo el CUI 110016000050202256528 | <p>Es otra acción presuntamente delincuencia, y el IDU, sin pudor alguno lo refiere: la Fiscalía delegada No. 91 bajo el REFERIDO NUC 110016000050202256528, recibió una denuncia en la cual la funcionaria ROSITA BARRIOS FIGUEROA presentó denuncia penal a nombre de la suscrita apoderada DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA, o sea, presuntamente suplantó a la abogada DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA.</p> <p>Es otro documento que debe permanecer en el expediente, tenemos todo el derecho a conocer la denuncia que el IDU colocó.</p> <p>VER ARCHIVO EN</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1yWAddO2qiUrVAgZ_wcyWSQ3wszodTHUL?usp=sharing</p> |
| Conforme a lo anterior, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU consideró que no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la accionante, en consideración a que siempre ha contestado sus reiterativos requerimientos | <p>El IDU en manera alguna atendió las insistentes solicitudes de entregar INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A – EN LIQUIDACIÓN, N.I.T. 800.207.579-4 propietaria del título judicial, el expediente completo del proceso de la EXPROPIACIÓN del inmueble registrado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50S 40279765 asunto que nos ocupa. A pesar que se lo solicitamos desde el día 13 de octubre de 2021.</p> <p>Es una grosera respuesta, todas las explicaciones que hemos presentado y a continuación seguimos ampliando, manifiestan las irresponsables acciones del IDU frente a la omisión con la que actuó para entregar a la accionante un expediente incompleto, que legalmente debe reposar en el IDU, lo que recibimos es un entramado de folios desordenados, incompletos, amputados, que presentaron para justificar los hechos mediante los cuales una presunta red criminal se apropia de los dineros del ESTADO.</p> <p>EL IDU OMITIÓ EL DEBER DE ENTREGAR LA TOTALIDAD DEL PROCESO A LA BENEFICIARIA POR EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA . Vulneró la ley 594 de 2000, artículo 27.</p> <p><i>Acceso y consulta de los documentos. Todas las personas tienen derecho a consultar los documentos de archivos públicos y a que se les expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a la ley.</i></p> |

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jue ces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso . sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artícu los 277 y 249-251 Cp.

2 LA SENTENCIA QUE IMPUGNAMOS NO VALORÓ LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN APORTADOS AL PROCESO NI LA HIPÓTESIS DE HECHO QUE SE PRESENTÓ CON BASE EN ESOS ELEMENTOS.

2.1 El Problema Jurídico no fue resuelto

Tal como quedará expuesto en el presente escrito, por lo tanto los derechos fundamentales de la accionante: al debido proceso, de defensa, de publicidad y de petición, permanecen vulnerados.

De acuerdo con la situación fáctica planteada, corresponde a este Despacho establecer si en el presente asunto el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU ha vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, de publicidad y de petición de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, o si en su defecto, a la fecha existe una carencia actual de objeto por hecho superado, en el entendido de que la entidad accionada informó que mediante el oficio 20223250728231 del 8 de abril de 2022, le suministró a la parte accionante la documentación requerida.

2.2 el IDU permanece, de manera caprichosa omitiendo la entrega de documentos que son públicos

No existe justificación material para que el IDU permanezca, de manera caprichosa omitiendo la entrega de documentos que son públicos

Además en manera alguna reconoció motivos de la demora ni señaló a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta

3 LA SENTENCIA QUE IMPUGNAMOS NO MOSTRÓ EJERCICIO INTERPRETATIVO CALIFICADO

3.1 POR CUANTO NO ES UN HECHO SUPERADO: EL IDU NO ENTREGÓ LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE

La vulneración a los derechos invocados continuó por parte del IDU.

Una expresa vulneración al numeral d) art. 4º ley 594 de 2000

d) Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la organización, conservación, uso y manejo de los documentos.

El Núcleo esencial del derecho de petición puede describirse de la siguiente manera, según las sentencias C-818 del 2011 y C-951 del 2014, la cuales se ocuparon de definir los elementos que integran el núcleo esencial del derecho de petición en los siguientes términos:

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

3.2 PRONTA RESOLUCIÓN- NO EXISTIÓ, EL IDU SE ENCUENTRA EN MORA DE CUMPLIR SU OBLIGACIÓN

De la manera mas respetuosa manifestamos al Juez de amparo que no existe justificación válida para que el IDU, siga en mora de entregar todos los documentos que deben obrar en el expediente.

A la fecha, después de más seis meses y medio, el IDU no entregó la totalidad del expediente solicitado desde el día 13 de octubre de 2021 y hasta el día 14 de febrero del 2022.

Desde octubre 13 de 2021 (En una reunión en las instalaciones del IDU con una funcionaria quien al parecer se llamaba MARCELA ZULUAGA, le realizamos la solicitud de todas las copias del proceso de expropiación del inmueble. (Folio 137 del expediente elaborado por la accionante)

La entidad no atendió la jurisprudencia ni a la constitución. .ii

Constituye una obligación de las autoridades y los particulares de responder las solicitudes presentadas por las personas en el menor plazo posible, sin que se exceda el tiempo legal establecido para el efecto, esto es, por regla general, 15 días hábiles

<https://drive.google.com/file/d/1EzgtNJ1XJozlk9XKPa5n6EgctUXBGxz8/view?usp=sharing>

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jue ces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso . sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículo los 277 y 249-251 Cp.

3.3 LA SENTENCIA NO ATENDIÓ QUE PRESENTAMOS LISTADO DE DOCUMENTOSQUE REPOSAN EN EL IDU Y NO FUERON ALLEGADOS EN LA ENTREGA DEL 8 DE ABRIL AL EXPEDIENTE

1. Denuncia a competencia que INVERSORA Y PROMOTORA GERONA SA EN LIQUIDACIÓN presentó al IDU el día 29 de noviembre de 2021.
2. Entrega completa de las denuncias colocadas por la apoderada de INVERSORA Y
- Los escritos describen unos documentos que reciben o entregan, los cuales no fueron anexados a la entrega:

| NUMERO DE FOLIO | CONTENIDO | FECHA | RADICADO |
|------------------|--|------------|-----------------------|
| 445 | DE DORYS EUGENIA ÁLVAREZ FAJARDO RECEPCIÓN VIRTUAL ATENCIÓN AL MEMORANDO 91043 TDJ 7922356 RT 46881A ANEXOS NO LOS ENTREGARON | 4/04/2021 | ORFEO 20215260730852 |
| 465- 465 R | MEMORANDO MARÍA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO A DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO TESORERA GERONA FALTAN LOS ANEXOS ☐ COPIA DEL CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2021 REMITIDO POR LA SEÑORA YOLEIMA ARIAS, JEFE DE LA SECCIÓN DE AUTENTICACIONES INFORMA QUE LOS SELLOS Y FIRMAS DEL PODER OTORGADO AL SEÑOR CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, CORRESPONDEN A LA NOTARÍA SOLICITUD AL NOTARIO CUARTO DEL BOGOTÁ MEDIANTE COMUNICACIÓN IDU NO 20225050124571 CON RESPECTO A LA AUTENTICIDAD DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL DEL PODER OTORGADO POR EL SEÑOR MIGUEL GERMÁN ARANGO DE FEX AL ABOGADO CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MEDIANTE EL CUAL SE FACULTA AL APODERADO PARA QUE INICIE Y LLEVE A SU CULMINACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y ACUERDO CONCILIATORIO CON EL ACREEDOR EL SEÑOR VICTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO. | 18/02/2021 | DTDP 20213250035033 |
| REPITE 460 460R | ORFEO RECURSO DE REPOSICION SIN NO AGREGÓ EL ESCRITO PRESENTADO POR LA ACCIONANTE. | 17/11/2021 | ORFEO 2021 5261884922 |
| REPITE 473-473R | JEAN CARLO SUESCUN SANABRIA SUBDIRECTOR GENERAL JURÍDICO RESPONDE A LA PERSONERÍA NO INCORPORAN FOLIOS QUE EL MEMORIAL DICE ANEXAR 20223250235961 20223250238241 | 10/02/2022 | DTDP 2022325024371 |
| REPITE 480- 480R | SEGUNDO DERECHO DE PETICIÓN SIN PREFIJO 202115261687312 NO ALLEGAN ANEXOS | 12/10/2021 | |
| REPITE 481-482 | REPITE PRIMER DERECHO DE PETICIÓN NO ALLEGAN ANEXOS PRESENTADOS | 24/09/2021 | 20215261582152,00 |
| 528-529R | SIN ANEXOS SIN ESCRITO DE TUTELA SIN RADICADO | | |
| 530-534 R | SOLICITUD DE CONCILIACIÓN RADICADO ORFEO SIN ANEXOS SIN ESCRITO DE SUBSANACIÓN | 28/01/2022 | |
| 446 - 446R | DORYS EUGENIA ÁLVAREZ FAJARDO A MARCELA ZULUAGA FRANCO SIN RADICADO, ES UN PASQUÍN, SIN RADICADO, SIN FIRMA AYN CORREO QUE LO RESPALDE | 27/04/2021 | |

- PROMOTORA GERONA S.A EN LIQUIDACIÓN, a la subdirectora del IDU , quien se comprometió a hacerse parte en las mismas y a colaborar con la investigación. Este hecho no sucedió, y tampoco adjuntó al expediente las evidencias.
3. Acta de la audiencia del 25 de enero de 2022, ROSITA BARRIOS FIGUEROA, con sus anexos.
4. Memorial del 28 de enero de 2022, en el que ROSITA BARRIOS FIGUEROA, manifestó estar investigando pero de manera sospechosa, es con un radicado diferente.
5. Memorial del 31 de enero de 2021, INVERSORA Y PROMOTORA GERONA SA EN LIQUIDACIÓN, manifiesta total desacuerdo con el falso poder que entregó ROSITA

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jue ces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso . sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artícu los 277 y 249-251 Cp.

BARRIOS el día 25 de enero de 2022, de las presuntas falsedades en las verificaciones del falso poder.

6. Denuncia penal que ROSITA ESTHER BARRIOS colocó suplantando el nombre de DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA. En la Fiscalía delegada No. 91 bajo el Referido NUC. 110016000050202256528

3.4 EL IDU NO ALLEGÓ AL EXPEDIENTE LAS EVIDENCIAS DEL PAGO CON CHEQUE DE GERENCIA A VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO

EL IDU NO ENTREGÓ LOS ANEXOS QUE SON NOMBRADOS EN ALGUNOS FOLIOS QUE ENTREGÓ EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2022, ASÍ:

3.5 NO VALORÓ QUE ADVERTIMOS ACERCA DE LOS DOCUMENTOS QUE POR EL MISMO OCULTAMIENTO IGNORAMOS QUE PUEDAN REPOSAR EN EL

No entregaron el recibo de pago con la firma de la mujer llamada DORYS EUGENIA ÁLVAREZ quien dice haberse presentado para que le entregaran en cheque de gerencia la totalidad del dinero que pertenece a INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN.

No allegaron las evidencias mediante las cuales el IDU buscó al representante legal de la accionante MIGUEL ARANGO DE FEX, para verificar el desembolso mediante el cual el IDU podía entregar los dos mil trescientos sesenta y un millones trescientos ochenta y tres mil trescientos setenta y cuatro pesos (\$2.361.383.374,00) moneda corriente, propiedad de la empresa.

EXPEDIENTE

3.6 NO ADVIRTIÓ LOS DAÑOS CAUSADOS QUE POR EL HECHO DE OMITIR LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE, SON GRAVÍSIMOS

El hecho del ocultamiento de los documentos enunciados, presuntamente muestra manipulación de las pruebas, juicio a favor, con el consecuente daño antijurídico al patrimonio del ESTADO.

3.7 IGNORÓ QUE EL IDU FALTÓ AL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, en razón a que no pudieron los funcionarios, ni el Director Técnico Jurídico asegurar una numeración congruente, clara y precisa.

3.8 YERRA LA SENTENCIA EN EL ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DE FONDO

La sentencia, no tuvo en cuenta que en las consideraciones de la misma demostró que la respuesta emitida por la accionada no resolvió de fondo la petición

Según la sentencia, se respondió materialmente la petición, **clara**: inteligible y con argumentos de fácil comprensión, **precisa** se atendió directamente a lo solicitado, **congruente**, la respuesta fue conforme con lo solicitado y **consecuente** con el trámite dentro del cual la solicitud fue presentada.

3.8.1 EL IDU NO ENTREGÓ LA RESPUESTA DE FONDO

La petición no se resolvió de fondo.

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

No es de fondo no entregó la totalidad del expediente. Faltan folios de pruebas, actas, derechos de petición, anexos. No es un expediente claro, no es inteligible con esa numeración errónea en ese volumen de folios.

Acuerdo 002 de 2014 marzo 14, Archivo General de la Nación.

"Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones"

El artículo 16 de la Ley 594 de 2000 establece como una de las obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las Entidades Públicas, es velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y que serán responsables de su organización y conservación:

Consejo de Estado – Sección Tercera, en sentencia del 27 de enero del 2000, C. P. Dr. Alier E. Hernández Enríquez.

"El Consejo de Estado apunta en cuanto al concepto de daño antijurídico: "Entendido jurisprudencialmente como el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a alguien, en su persona, bienes, libertad, honor, afectos, creencias, etc., suponiendo la destrucción o disminución de ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo, sin que el ordenamiento jurídico le haya impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carezca de causales de justificación."

Archivo General de la Nación. ACUERDO 002 DE 2014. Marzo 14 es explícita de cómo se numeran los expedientes.

Definición de expediente:

Expediente: Conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona, dependencia o unidad administrativa, vinculados y relacionados entre sí y que se conservan manteniendo la integridad y orden en que fueron tramitados, desde su inicio hasta su resolución definitiva.

hace referencia al deber que tienen las autoridades y los particulares de responder materialmente a las peticiones realizadas. Según esta Corte, para que no se vulnere el derecho fundamental de petición, la respuesta debe observar las siguientes condiciones:ⁱⁱⁱ

Este nuevo hecho del accionado va en contra del principio de la seguridad jurídica y destruye el principio de la confianza legítima que el administrado debe tener de las instituciones que lo administran. Y como consecuencia el accionante tiene que manifestar que esto vulnera el derecho fundamental al debido proceso, vulnera el principio de publicidad y el derecho de defensa.

3.8.2 NO HUBO CLARIDAD EN EL EXPEDIENTE ENTREGADO POR EL IDU

Claridad, esto es que la misma sea inteligible y que contenga argumentos de fácil comprensión

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. Sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

El expediente que entregó el IDU es oscuro, clandestino pues en dos ocasiones el foliado tiene la numeración del 450 al 499, de manera que esta repetida la numeración. Cuando debía continuar con el 500 el foliado se devuelve a comenzar con el 450 hasta 499.

del Pilar Grajales quien está siempre en el nudo del ocultamiento, dice que entrega 534 folios, cuando en realidad hay 584 folios. Por lo tanto no aceptamos la respuesta del accionado puesto que no cumple con el requisito de claridad.

3.8.3 LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE NO CUMPLIÓ CON EL REQUISITO DE PRECISIÓN

Precisión, de manera que la respuesta atienda directamente a lo solicitado por el ciudadano y que se excluya toda información impertinente y que conlleve a respuestas evasivas o elusivas;

No sobra manifestar en esta acción de tutela que las maniobras del accionado en la respuesta no cumple con el requisito de precisión, cuando dicen que entregan 534 folios enumerados pero en realidad hay 584 folios. 50 folios de mas que se prestan como excusa para borrar la numeración, tergiversar, intercalar, dar interpretaciones erróneas, y maniobrar el expediente.

La vulneración al debido proceso se ocasiona por la respuesta del accionado por no cumplir el requisito de congruencia, pues el expediente mutilado que presenta no es coherente con los documentos que el accionante le ha presentado como defensa y que deben reposar en el expediente de la expropiación a la Sociedad Inversora y Promotora Gerona.

Otro hecho: la numeración de los folios no es congruente ni precisa.

Este nuevo hecho del accionado va en contra del Principio de la seguridad jurídica y destruye el Principio de la confianza legítima que el administrado debe tener de las instituciones que lo administran. Y como consecuencia el accionante tiene que manifestar que esto vulnera el derecho fundamental al debido proceso, vulnera el principio de publicidad y el derecho de defensa.

3.8.4 EL EXPEDIENTE ENTREGADO POR EL IDU NO CUMPLIÓ CON EL REQUISITO DE CONGRUENCIA

Congruencia, que hace referencia a que la respuesta esté conforme con lo solicitado

La vulneración al debido proceso se ocasiona por la respuesta del accionado por no cumplir el requisito de congruencia; el expediente mutilado que presenta no es coherente con los documentos que el accionante le presentó como defensa y que deben reposar en el expediente de la expropiación a la Sociedad Inversora y Promotora Gerona S.A, en liquidación.

3.8.4.1 EL IDU NO ENTREGÓ SENDOS DOCUMENTOS QUE SE EXIGE REPOSEN EN EL EXPEDIENTE-
Ver numeral 4º del presente escrito de impugnación

| | |
|---|----|
| 4 NO ES UN HECHO SUPERADO: EL IDU NO ENTREGÓ LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE | |
| 12 | |
| 4.1 PRONTA RESOLUCIÓN- NO EXISTIÓ, EL IDU SE ENCUENTRA EN MORA DE CUMPLIR SU OBLIGACIÓN | 12 |
| 4.2 EL IDU NO ALLEGÓ AL EXPEDIENTE LAS EVIDENCIAS DEL PAGO CON CHEQUE DE GERENCIA A VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO | 13 |
| 4.3 EL IDU NO ENTREGÓ LOS ANEXOS QUE SON NOMBRADOS EN ALGUNOS FOLIOS QUE ENTREGÓ EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2022, ASÍ: | 13 |
| 4.4 DOCUMENTOS QUE CONOCEMOS REPOSAN EN EL IDU Y QUE NO ALLEGARON EN LA ENTREGA DEL 8 DE ABRIL AL EXPEDIENTE | 14 |
| 4.5 LOS DOCUMENTOS QUE POR EL MISMO OCULTAMIENTO IGNORAMOS QUE PUEDAN REPOSAR EN EL EXPEDIENTE | 14 |
| 4.6 LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL HECHO DE OMITIR LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE SON GRAVÍSIMOS | 14 |
| 4.7 EL IDU FALTÓ AL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, | 14 |

3.8.5 EL IDU NO ENTREGÓ EL ACTA DEL 25 DE ENERO DE 2022, NI SUS ANEXOS

Quedó probada que el IDU fue incongruente con la declaración que realizó al despacho de amparo y decirle que entregó la totalidad del expediente, que fue lo solicitado. La misma Juez de amparo, descubrió que el acta de 25 de enero de 2022 no fue entregada por el IDU, la encontró entre las pruebas allegadas por la accionante y vale la pena agregar que la señora Juez, no advirtió en la sentencia esta falla, que de tajo hace que no se pueda dar por hecho cumplido.

Reza el escrito de la sentencia :

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jue ces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso . sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artícu los 277 y 249-251 Cp.

Reunión del 25 de enero de 2022 celebrada entre INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, en virtud de la cual la parte accionante elevó una solicitud de copia del expediente administrativo

Frente a esta reunión sostenida entre las partes en controversia, se tiene que en la fecha mencionada se suscribió un acta en la que se consignó que la entidad accionada le suministró a la accionante la siguiente documentación:

| | |
|---|---|
| En este estado de la reunión, se hace entrega de copias simples de los siguientes documentos: | |
| 1. | Copia del acta de conciliación efectuada en el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral- Acta de Conciliación Virtual de fecha 27 de octubre de 2020. |
| 2. | Copia del Certificado de Cámara de Comercio de Bogotá con código de verificación 121029539DCFBD de fecha 19 de marzo de 2021 |
| 3. | Copia del poder especial otorgado al doctor CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, presuntamente por el señor MIGUEL GERMÁN ARANGO DE FEX |
| 4. | Copia del correo electrónico de fecha 9 de febrero de 2021 remitido por la señora YOLEIMA ARIAS, jefe de la sección de autenticaciones informa que los sellos y firmas del poder otorgado al señor CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, corresponden a la notaría |

(...)

| ANEXOS | | |
|--------|--|--------|
| No | Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia) | Folios |
| 1 | Copia del acta de conciliación efectuada en el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral- Acta de Conciliación Virtual de fecha 27 de octubre de 2020. | 1 |
| 2 | Copia del Certificado de Cámara de Comercio de Bogotá con código de verificación 121029539DCFBD de fecha 19 de marzo de 2021 | 3 |
| 3 | Copia del poder especial otorgado al doctor CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, presuntamente por el señor MIGUEL GERMÁN ARANGO DE FEX | 1 |
| 4 | Copia del correo electrónico de fecha 9 de febrero de 2021 remitido por la señora YOLEIMA ARIAS, jefe de la sección de autenticaciones informa que los sellos y firmas del poder otorgado al señor CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, corresponden a la Notaría. | 1 |
| 5 | Original de la declaración juramentada No 322 de fecha 24 de enero de 2022 | 1 |

Igualmente, en la referida acta se consignó la solicitud que elevó la apoderada de la parte accionante, en esta ocasión sí sobre la entrega de la totalidad del expediente, así:

| |
|--|
| La doctora DIANA RUÍZ ARIZA haciendo uso del derecho de petición, solicita se le haga entrega de la totalidad de la documentación que reposa en el expediente en el que está involucrado la firma Inversora y promotora Gerona S.A en liquidación, así mismo aporta para que haga parte de la presente acta la declaración juramentada No 322 de fecha 24 de enero de 2022, en donde se aclara el punto No |
|--|

| DESARROLLO |
|---|
| 9, ya que el día de ayer desconocíamos el presunto poder mediante el cual se fundamenta el pago realizado. Así mismo se informa a los asistentes que nos encontramos en el proceso de verificación de los poderes ante las Notarías respectivas y el acta de conciliación ante el Ministerio de Justicia. |
| CONCLUSIONES |
| 1. Se dará trámite a la denuncia interpuesta y se responderá de fondo a la doctora Diana Ruiz Ariza respecto del trámite dado por parte de esta Subdirección General 2. Se dará traslado a la Dirección Técnica de Predios del Derecho de Petición instaurado por la doctora DIANA RUÍZ ARIZA, donde solicita copia de la totalidad del expediente en donde está involucrado la firma Inversora y promotora Gerona S.A en liquidación. 3. La presente acta se suscribe en dos (2) ejemplares originales |

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jue ces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso . sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artícu los 277 y 249-251 Cp.

Así las cosas, este constitucional debe indicar que dentro del expediente no halló soporte alguno de que la referida solicitud de copias haya sido atendida por el IDU de manera oportuna o por lo menos anterior a la interposición de la acción de tutela, empero la cual manifestó y acreditó debidamente en su contestación dentro de este trámite constitucional, que el pasado 8 de abril de 2022, le suministró copia de la totalidad del expediente administrativo a la parte demandante, a través del radicado No. 20223250728231.

De manera que, conforme a la anterior jurisprudencia, encuentra este Despacho que, frente al primer requisito, esto es, la pronta resolución, el IDU emitió contestación a la petición de la accionante hasta el pasado 8 de abril de los corrientes, esto es, transcurridos más de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud (término para la petición de documentos), de lo cual se puede colegir que no fue oportuna.

3.8.6 LA CONSECUENCIA POR NO HABER EL IDU ENTREGADO LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ENCONTRAR DENTRO DEL EXPEDIENTE

La accionante se encuentra desamparada para poderse defender, se le violó el derecho fundamental al debido proceso, a la transparencia, a la defensa.

Nótese que en el numeral 3.9.1 del presente escrito, la misma Juez de amparo, reconoció que el IDU no entregó el acta del 25 de enero de 2022, la cual incorpora documentos importantísimos, como la declaración juramentada de los miembros de la empresa que no reconocen en manera alguna el trámite e intervinientes del acta que aceptó el IDU para pagar el dinero que debería haber pagado a INVERSORA Y PROMOTORA GERONA SA. EN LIQUIDACIÓN

3.9 YERRA LA SENTENCIA POR CUANTO NO ADVIRTIÓ QUE LA ACCIONADA PROFIRIÓ HECHOS NO CIERTOS QUE FUERON DEBATIDOS OPORTUNAMENTE POR LA ACCIONANTE

3.9.1 A pesar que la Juez de amparo encontró que el IDU efectivamente omitió incluir la pieza de la reunión entre el IDU y la compañía accionante, el 25 de enero de 2022

Folios 12 y 13 de la sentencia:

La sentencia resumió el hecho de la siguiente manera:

3.9.2 La parte accionante elevó una solicitud de copia del expediente administrativo.

3.9.3 En la fecha mencionada se suscribió un acta en la que se consignó que la entidad accionada le suministró a la accionante la siguiente documentación:

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. Sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

En este estado de la reunión, se hace entrega de copias simples de los siguientes documentos:

1. Copia del acta de conciliación efectuada en el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral- Acta de Conciliación Virtual de fecha 27 de octubre de 2020.
2. Copia del Certificado de Cámara de Comercio de Bogotá con código de verificación 121029539DCFBD de fecha 19 de marzo de 2021
3. Copia del poder especial otorgado al doctor CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, presuntamente por el señor MIGUEL GERMÁN ARANGO DE FEX
4. Copia del correo electrónico de fecha 9 de febrero de 2021 remitido por la señora YOLEIMA ARIAS, jefe de la sección de autenticaciones informa que los sellos y firmas del poder otorgado al señor CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, corresponden a la notaría

| ANEXOS | | |
|--------|--|--------|
| No | Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia) | Folios |
| 1 | Copia del acta de conciliación efectuada en el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral- Acta de Conciliación Virtual de fecha 27 de octubre de 2020. | 1 |
| 2 | Copia del Certificado de Cámara de Comercio de Bogotá con código de verificación 121029539DCFBD de fecha 19 de marzo de 2021 | 3 |
| 3 | Copia del poder especial otorgado al doctor CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, presuntamente por el señor MIGUEL GERMÁN ARANGO DE FEX | 1 |
| 4 | Copia del correo electrónico de fecha 9 de febrero de 2021 remitido por la señora YOLEIMA ARIAS, jefe de la sección de autenticaciones informa que los sellos y firmas del poder otorgado al señor CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, corresponden a la Notaría. | 1 |
| 5 | Original de la declaración juramentada No 322 de fecha 24 de enero de 2022 | 1 |

3.9.4 En el acta se consignó la solicitud que elevó la apoderada de la parte accionante, en esta ocasión sí sobre la entrega de la totalidad del expediente, así:

| | |
|--|--|
| La doctora DIANA RUÍZ ARIZA haciendo uso del derecho de petición, solicita se le haga entrega de la totalidad de la documentación que reposa en el expediente en el que está involucrado la firma Inversora y promotora Gerona S.A en liquidación, así mismo aporta para que haga parte de la presente acta la declaración juramentada No 322 de fecha 24 de enero de 2022, en donde se aclara el punto No | |
| DESARROLLO | |
| 9, ya que el día de ayer desconocíamos el presunto poder mediante el cual se fundamenta el pago realizado. | |
| Así mismo se informa a los asistentes que nos encontramos en el proceso de verificación de los poderes ante las Notarías respectivas y el acta de conciliación ante el Ministerio de Justicia. | |
| CONCLUSIONES | |
| 1. Se dará trámite a la denuncia interpuesta y se responderá de fondo a la doctora Diana Ruíz Ariza respecto del trámite dado por parte de esta Subdirección General | |
| 2. Se dará traslado a la Dirección Técnica de Predios del Derecho de Petición instaurado por la doctora DIANA RUÍZ ARIZA, donde solicita copia de la totalidad del expediente en donde está involucrado la firma Inversora y promotora Gerona S.A en liquidación. | |
| 3. La presente acta se suscribe en dos (2) ejemplares originales | |

- 3.9.5 La sentencia indicó que dentro del expediente no halló soporte alguno de que la referida solicitud de copias haya sido atendida por el IDU de manera oportuna o por lo menos anterior a la interposición de la acción de tutela.
- 3.9.6 Que el IDU manifestó y acreditó debidamente en su contestación dentro de este trámite constitucional, que el pasado 8 de abril de 2022, le suministró copia de la totalidad del expediente administrativo a la parte demandante, a través del radicado No. 20223250728231.
- 3.9.7 Manifestó la sentencia que la entrega del expediente no fue oportuna, en razón a que el IDU emitió contestación a la petición de la accionante hasta el pasado 8 de abril de los corrientes,

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jue ces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso . sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artícu los 277 y 249-251 Cp.

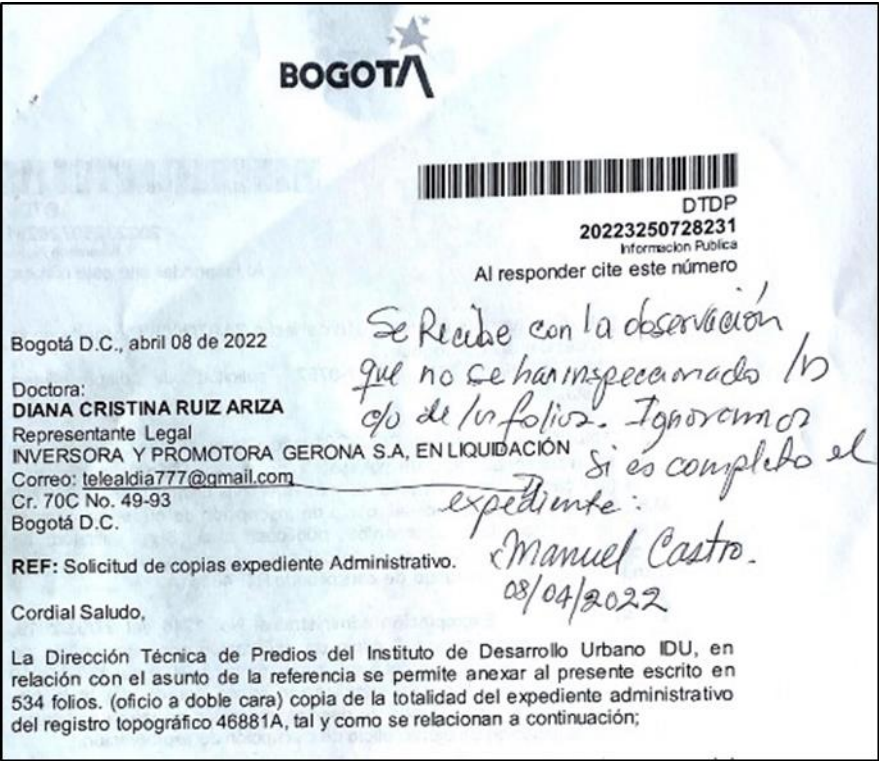
esto es, transcurridos más de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud (término para la petición de documentos), de lo cual se puede colegir que no fue oportuna.

Que la garantía del derecho no tiene tal extensión, que lo relevante es que se emita respuesta en los términos indicados, en la medida de que le proporcionó a la parte accionante la totalidad de las piezas que hacen parte del expediente administrativo, como así se consignó en el referido oficio en el que se plasmó además el recibido de la interesada

3.9.8 La sentencia no advirtió que la accionante nunca admitió que recibió la totalidad del expediente administrativo.

La sentencia no advirtió que la accionada, al recibir el expediente por parte del IDU, en manera alguna manifestó que recibió la totalidad del expediente administrativo, lo plasmado en el oficio de entrega es el siguiente:

Se recibe con la observación que no se han inspeccionado cada uno de los folios. Ignoramos si es completo el expediente.



3.9.9 La sentencia no advirtió, que el expediente digital que envió el IDU es un presunto engaño al proceso, hay falta de lealtad procesal por parte del IDU.

El enlace que presentó el IDU en la contestación a la tutela, y acerca del cual declaró contener la documentación digital, manifestamos que actualmente no contiene nada. El día que lo recibimos contenía la transcripción de la declaración juramentada de MIGUEL ARANGO DE

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

FEX (anexamos copia el archivo que contenía el enlace), ahora, no conduce a contenido alguno.

Enlace entregado por el IDU:

https://drive.google.com/drive/folders/1NWqrWYfHtM-0kGGDjzMpxo2ntkKhUnl_?os=Schering

- 3.9.10 La sentencia reconoció que la accionante los días 11 y 18 de abril de 2022, enunció o enumeró los documentos que no le fueron entregados por el IDU

Reza la sentencia:

*"Al respecto, para este Despacho es imperioso precisar que no son admisibles las manifestaciones hechas por la parte accionante mediante los memoriales del 11 y 18 de abril de 2022, respectivamente, **en los que enunció o enumeró cada uno de los documentos que, según su dicho, no le fueron entregados por parte del IDU**"*

Subrayas y negrilla autoría de la accionante

- 3.9.11 La sentencia renunció a admitir los reclamos respecto a las piezas faltantes en el expediente

"(...) por cuanto debe recordar que presentó una solicitud genérica de copias de la totalidad del expediente, sin que le haya especificado a la accionada cuáles eran las piezas que puntualmente requería (...)"

- 3.9.12 La sentencia exigió prueba que las actuaciones faltantes hacían parte del expediente

"(...) y mucho menos suministró prueba alguna de que dichas actuaciones sí hicieran parte del expediente, pero que, por ejemplo, por capricho o renuencia el IDU no haya querido suministrárselas (...)"

- 3.9.13 La sentencia proveyó que se escapa del control de este Juez constitucional: la foliación correcta de las copias, el orden cronológico, la sustracción y/u ocultamiento de las mismas

- 3.9.14 La sentencia adujo que eran: la Fiscalía General de la Nación, la Personería Distrital y/o Procuraduría General de la Nación, los llamados a conocer el asunto, si la accionante lo consideraba

- 3.9.15 La sentencia dio por notificada la respuesta, y reconoció el desacuerdo de la accionante frente a dicha contestación, en las manifestaciones que realizó los días 11 y 18 de abril de 2021

De igual forma, la citada documentación se enviará de forma digital al correo electrónico aportado telealdia777@gmail.com el cual puede ser consultado en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1NWqrWYfHtM-0kGGDjzMpxo2ntkKhUnl_?usp=sharing

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. Sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

3.10 LA SENTENCIA NO ADVIRTIÓ QUE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA ACCIONANTE SIGUEN VULNERADOS

3.10.1 LA SENTENCIA OMITIÓ VALORAR LA BUENA FE CON LA QUE ACTÚA LA ACCIONANTE. Art. 83 CN

"(..)Al respecto, para este Despacho es imperioso precisar que no son admisibles las manifestaciones hechas por la parte accionante mediante los memoriales del 11 y 18 de abril de 2022, respectivamente, en los que enunció o enumeró cada uno de los documentos que, según su dicho, no le fueron entregados por parte del IDU(...)",

"(..)por cuanto debe recordar que presentó una solicitud genérica de copias de la totalidad del expediente, sin que le haya especificado a la accionada cuáles eran las piezas que puntualmente requería(...)"

La buena fe se debe probar, esto en caso de duda, por lo tanto, el Juez de amparo debió advertir que la suscrita accionante allegó sendas pruebas a sus memoriales para demostrar sus reclamos.

Si bien solicitamos la totalidad del expediente, esto no justifica en manera alguna que el IDU falte al principio de probidad y omita adjuntar todo lo sucedido en el proceso; a sabiendas que son folios que, como lo justificamos anteriormente, son piezas que contienen pruebas fehacientes de las omisiones del IDU para verificar el acta de conciliación con la cual pagó dos mil trescientos sesenta y un millones trescientos ochenta y tres mil trescientos setenta y cuatro pesos (\$2.361.383.374,00) moneda corriente, y entregó el dinero a una presunta red delincuencia, ahora debe reparar el daño que causó al patrimonio del ESTADO.

3.10.2 LA SENTENCIA NO RECONOCIÓ EL CÚMULO DE JUSTIFICACIONES QUE LA ACCIONANTE MANIFESTÓ CON PRUEBAS A LOS ESCRITOS DEL 11 Y 18 DE ABRIL PARA SOLICITAR LOS FOLIOS FALTANTES (Sentencia 305 de 2013 Corte Constitucional) Rezan las consideraciones de la sentencia impugnada :

"(..)y mucho menos suministró prueba alguna de que dichas actuaciones sí hicieran parte del expediente, pero que, por ejemplo, por capricho o renuencia el IDU no haya querido suministrárselas(...)".

"Conforme a la anterior jurisprudencia, a continuación, se abordarán de manera independiente las peticiones presentadas y referidas por la parte accionante, que este Despacho pudo extraer de la extensa documentación obrante en el expediente, y que únicamente tienen relación estrecha con lo referido por la demandante, esto es, la entrega de copias del procedimiento administrativo obrante en el IDU."

3.10.3 LA SENTENCIA NO ADVIRTIÓ QUE LA IRREGULAR FORMA EN QUE LA ACCIONADA ENTREGÓ EL EXPEDIENTE CONTINÚA VIOLANDO EL AMPARO SOLICITADO

De la manera mas respetuosa manifestamos que precisamente el IDU, vulneró el debido proceso, el principio de transparencia y el derecho a la defensa, cuando nos impide acceder a un expediente completo y legalmente elaborado.

"(..) Aunado a ello, debe puntualizarse que, se escapa del control de este Juez constitucional que la totalidad de las copias entregadas no esté foliada de manera correcta, que se haya hecho con lápiz, que no se haya ordenado

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. Sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

cronológicamente, o que se hayan sustraído u ocultado piezas procesales, porque si de ello advierte irregularidad alguna la parte accionante (...)”

muy respetuosamente solicitamos al Juez de amparo se sirva proteger de esta violación manifiesta, a la accionante, en razón a que además de ser víctimas por los hechos sucedidos, se nos revictimiza cuando el Juez de amparo no ordena a la accionada entregar los documentos expresamente determinados en los escritos del 11 y 18 de abril de 2022, que en el presente escrito volvimos a referir. Documentos que no son reserva ordenada por Juez alguno, reconocidos por la accionada y por la señora Juez de amparo.

4 POR LAS RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, NO EXISTE HECHO SUPERADO ALGUNO

Por las razones planteadas, la sentencia adolece de un pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada, por cuanto lo pretendido mediante la interposición de la acción constitucional no fue satisfecho en manera alguna y no se emitió la orden judicial correspondiente.

4.1 Por la razones de hecho y de derecho, se evidencia que NO se han superado los hechos vulneradores de los derechos fundamentales de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA SA EN LIQUIDACIÓN

Los hechos que motivaron la interposición de la acción de tutela, por cuanto además de que se presentó una demora injustificada por parte de la entidad accionada para emitir un pronunciamiento, entregó un expediente grosero, sin cumplimiento de los requisitos legales y omitió incorporar piezas fundamentales para la defensa del accionante.

4.2 NO se logró acreditar durante el transcurso del presente el trámite la entrega del expediente completo que reposa en el IDU y que contiene los documentos referente a la expropiación por vía administrativa, resolución 1246 del 27 de marzo de 2019 RAD. 20193250012466 RT. 46881 A (FOLIOS, 196-197 del expediente elaborado por la apoderada accionante)

4.3 El IDU NO suministró la TOTALIDAD de copias requeridas, y no subsanó de tajo, la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, a la publicidad y a la defensa, siguen siendo vulnerados los derechos implorados

4.4 Las consideraciones de la sentencia no advirtieron que la accionante precisó, a la Juez de amparo de manera taxativa los documentos específicos que no fueron entregados

Los que ocultó el IDU y que se encuentran en su poder.

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

- 4.5 NO cesó la vulneración al núcleo esencial del derecho reclamado. La accionada continua en peligro de vulneración y el Juez de tutela, respetuosamente debe emitir la orden de protección solicitada.

5 SOLICITAMOS MUY COMEDIDAMENTE SE REVOQUE EN SU TOTALIDAD LA SENTENCIA PROFERIDA

En su lugar se ordene al IDU a cumplir con las solicitudes presentadas en el numeral 9º

"PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO

dentro de la acción de tutela interpuesta por DIANA CRISTINA RUÍZ ARIZA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.916.910 y la T. P. No. 280.612 del CSJ, apoderada judicial de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, identificada con el NIT 830.026.001-1, en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, frente a sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, de publicidad y de petición, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR este proveído de conformidad con lo señalado en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 y 5.º del Decreto reglamentario 306 de 1992.

TERCERO: Contra la presente decisión procede la impugnación ante el superior jerárquico dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 - inciso 1.º - del Decreto 2591 de 1991. Si no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión."

6 SOLICITAMOS AL JUEZ DE AMPARO ORDENE AL IDU CUMPLIR LA SOLICITUD PRESENTADA EN LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA

En consecuencia, solicitamos al Juez de amparo que revoque la sentencia de primera instancia y ordene el cumplimiento de la acción de tutela promovida por INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, a través de apoderada judicial, en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, que proteja y garantice los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, de publicidad y de petición, los cuales permanecen vulnerados.

Como quiera que el IDU, entregó de manera parcial y desordenada la documental, solicitamos muy respetuosamente que:

- 6.1 Se ordene a la entidad accionada, entregar los documentos referidos en el numeral 4º del presente escrito.


Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.


- 6.2 Que el IDU de foliación adecuada y claridad respecto a los folios 450- 499, del libro 2º , los cuales se repitieron.
- 6.3 Nota que se le advierta al IDU, que es una entidad del Estado obligada a atender las exigencias para archivo y foliación documental de conformidad con las normas del Archivo General de la Nación.
- 6.4 Que se ordene al IDU a cumplir con el mandato legal, en razón a que está obligada a entregar la totalidad de la documental solicitada, de conformidad con la ley 594 de 2000, artículo 27.


7 PRUEBAS


De la manera mas amable anexamos las pruebas relacionadas en el presente escrito, para que sean valoradas de conformidad con el art. 16 ss. C.G. del P. las cuales se encuentran el siguiente enlace:


https://drive.google.com/drive/folders/1yWAddO2qiUrVAgZ_wcyWSQ3wszodTHUL?usp=sharing


 ENTREGA ACCION DE TUTELA PARA OBTENER EXPEDIENTE IDU





 1. ENERO 25 DE 2022 ACTA CON ROSITA BARRIOS.pdf 




 2.archivo general de la nacion - FOLIACION.pdf 




 3. 110016000050202256528 RUTA DE SUPLANTACIÓN.pdf 




 4. 20225050729881 ESCRITO SOSPECHOSO DEL 8 DE ABRIL D...




 5. ABRIL 11 DURANTE LA NOTIFICACIÓN - IDU IREGULARIDAD...




 6. EXPEDIENTE CONSTRUIDO POR ACCIONANTE HASTA MAR...



 7. abril 18 de 2022-ACCION DE TUTELA No 032-2022-00045 FO...



 8. 20213251927421 RT. 46881 NULIDAD DEL ACTO DE DICIEM...



 9. DICIEMBRE 28 IDU 20213251927421 (1).pdf PROVIDENCIA ...



 ARCHIVO QUE CONTIENE EL ENLACE - YA DESAPARECIO- DEC...

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jue ces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso . sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artícu los 277 y 249-251 Cp.

7.1 Anexamos el presente memorial

Del señor juez de amparo, cordialmente,



DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA

Apoderada

INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN

ⁱ INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Mediante escrito allegado a través de correo electrónico, Representado por el doctor Carlos Francisco Ramírez Cárdenas, en su calidad de Director Técnico de Gestión Judicial del IDU, dio contestación.

ⁱⁱ Corte Constitucional. C-007 de 2017. Núm. 15

ⁱⁱⁱ Corte Constitucional. C-007 de 2017. Núm. 15

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO TREINTA Y TRES (33) PENAL DEL CIRCUITO
CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO

Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022).

| | |
|-------------------|---|
| Referencia | Acción de Tutela No. 2022-00045 Segunda instancia |
| Accionante | Inversora y Promotora Gerona S.A. en Liquidación |
| Accionado | Instituto de Desarrollo Urbano IDU |

1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Resolver el recurso de impugnación interpuesto por la accionante INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, que actúa a través de su apoderada general doctora Diana Cristina Ruiz Ariza, contra la decisión proferida el veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022) por el Juzgado Treinta y Dos (32) Penal Municipal con Función de Conocimiento de esta ciudad, mediante la cual declaró carencia actual de objeto por hecho superado.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La parte accionante hizo referencia a aspectos procesales ocurridos al interior del trámite administrativo de expropiación adelantado por el IDU sobre el terreno identificado con matrícula inmobiliaria 50S-40279765, dentro del cual se profirió la Resolución No. 1246 de 2019 que ordenó el pago de la suma de dos mil cuatrocientos cuarenta y tres millones seiscientos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta y siete pesos (2.443'648.757), suma que consideró fue indebidamente entregada a un tercero desconocido por la sociedad que representa.

Por lo anterior, elevó múltiples peticiones a la entidad accionada relacionadas con las presuntas situaciones irregulares, así mismo, indicó que en reunión adelantada entre las partes con ocasión a este asunto, el 25 de enero de 2022 presentó solicitud de “*entrega de la totalidad de la documentación que reposa en el expediente*”, sin respuesta, siendo esta la razón para acudir a la acción constitucional, requiriendo lo siguiente:

“Ordenar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, que a través, de su director Diego Sánchez Fonseca, realice todas las acciones que sean necesarias y entregue de manera inmediata a la accionante, la totalidad de la documentación que reposen el IDU, respecto a la EXPROPIACIÓN de una parte del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No.50S-40279765, en favor de la sociedad INVERSORA Y PROMOTORAGERONA S.A. –EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT 830.026.001-1, que culminó con la resolución 1246 del 27 de marzo de 2019.

Ordenar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, que se abstenga de ahora en adelante reincidir en la violación al debido proceso, perturbación a la publicidad, y defensa de la sociedad INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. –EN LIQUIDACIÓN”.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 32 Penal Municipal con Función de Conocimiento de esta ciudad el veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022) declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, al considerar:

“...Como resulta evidente, este Despacho encuentra que no es necesario realizar un mayor análisis sobre las referidas peticiones, considerando que la inconformidad de la parte accionante radica en la presunta omisión por parte del IDU en suministrarle copia del expediente administrativo en cuestión, o de alguna de sus actuaciones, empero que como se ilustró anteriormente, ello ni siquiera fue el objeto de esas solicitudes. Las peticiones se formularon como una reclamación frente al pago del valor de la indemnización, al parecer, a un tercero sin autorización por parte del IDU, frente a lo cual la entidad, mediante el oficio No. 20213251632541 del 28 de octubre de 2021, le suministró a la accionante el fundamento o las razones de cómo se llevó a cabo dicho pago, sin que hasta esa fecha le haya sido requerida propiamente la entrega de alguna documentación, más allá del “memorando No. 20213250035033 de fecha 18/02/2021 con el cual se realiza la solicitud de entrega del depósito judicial” que la accionante entregó frente al numeral 5.2 de la solicitud.

Reunión del 25 de enero de 2022 celebrada entre INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU, en virtud de la cual la parte accionante elevó una solicitud de copia del expediente administrativo. (...)

Así las cosas, este constitucional debe indicar que dentro del expediente no halló soporte alguno de que la referida solicitud de copias haya sido atendida por el IDU de

manera oportuna o por lo menos anterior a la interposición de la acción de tutela, empero la cual manifestó y acreditó debidamente en su contestación dentro de este trámite constitucional, que el pasado 8 de abril de 2022, le suministró copia de la totalidad del expediente administrativo a la parte demandante, a través del radicado No. 20223250728231.(...)

Al respecto, para este Despacho es imperioso precisar que no son admisibles las manifestaciones hechas por la parte accionante mediante los memoriales del 11 y 18 de abril de 2022, respectivamente, en los que enunció o enumeró cada uno de los documentos que, según su dicho, no le fueron entregados por parte del IDU, por cuanto debe recordar que presentó una solicitud genérica de copias de la totalidad del expediente, sin que le haya especificado a la accionada cuáles eran las piezas que puntualmente requería, y mucho menos suministró prueba alguna de que dichas actuaciones sí hicieran parte del expediente, pero que, por ejemplo, por capricho o renuencia el IDU no haya querido suministrárselas.

Aunado a ello, debe puntualizarse que, se escapa del control de este juez constitucional que la totalidad de las copias entregadas no esté foliada de manera correcta, que se haya hecho con lápiz, que no se haya ordenado cronológicamente o que se hayan sustraído u ocultado piezas procesales, porque si de ello advierte irregularidad alguna la parte accionante, será ante la Fiscalía General de la Nación, que deberá ponerlo en conocimiento dentro de la misma investigación que se adelanta por los hechos que dieron origen al presente trámite de tutela o en su defecto ponerlo en conocimiento ante los entes disciplinarios correspondientes para que adopten las decisiones del caso, como la Personería Distrital y/o Procuraduría General de la Nación.”

4. IMPUGNACIÓN

La accionante se refirió a las respuestas ofrecidas por la entidad accionada durante el trámite tutelar, señalando que “*faltó a la verdad*”, reiterando su posición frente a las presuntas irregularidades en las que se incurrió al interior del trámite administrativo frente al pago de la indemnización. Afirmó que el IDU “*oculta*” pruebas y permanece “*de manera caprichosa omitiendo la entrega de documentos que son públicos*”, dado que no hizo entrega de la totalidad del expediente solicitado, echando de menos lo siguiente:

1. Denuncia a competencia que INVERSORA Y PROMOTORA GERONA SA EN LIQUIDACIÓN presentó al IDU el día 29 de noviembre de 2021.
2. Entrega completa de las denuncias colocadas por la apoderada de INVERSORA Y
Los escritos describen unos documentos que reciben o entregan, los cuales no fueror anexados a la entrega:

| NÚMERO DE FOLIO | CONTENIDO | FECHA | RADICADO |
|------------------|---|------------|-----------------------|
| 445 | DE DORYS EUGENIA ÁLVAREZ FAJARDO RECEPCIÓN VIRTUAL ATENCIÓN AL MEMORANDO 91043 TDJ 792356 RT 46881A. ANEXOS NO LOS ENTREGARON | 4/04/2021 | ORFEO 20215260730852 |
| 445- 465 R | MEMORANDO MARÍA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO A DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO TESORERA GERONA FALTAN LOS ANEXOS IS COPIA DEL CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2021 REMITIDO POR LA SEÑORA YOLEIMA AREAS, JEFE DE LA SECCIÓN DE AUTENTICACIONES INFORMA QUE LOS SELLOS Y FIRMAS DEL PODER OTORGADO AL SEÑOR CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, CORRESPONDEN A LA NOTARÍA SOLICITUD AL NOTARIO CUARTO DEL BOGOTÁ MEDIANTE COMUNICACIÓN IDU NO 20225050124571 CON RESPECTO A LA AUTENTICIDAD DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL DEL PODER OTORGADO POR EL SEÑOR MIGUEL GERMÁN ARANGO DE FEX AL ABOGADO CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MEDIANTE EL CUAL SE FACULTA AL APODERADO PARA QUE INICIE Y LLEVE A SU CULMINACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y ACUERDO CONCILIATORIO CON EL ACREEDOR EL SEÑOR VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO. | 18/02/2021 | DTDP 20213250035033 |
| REPITE 460-460R | ORFEO RECURSO DE REPOSICION SIN NO AGREGÓ EL ESCRITO PRESENTADO POR LA ACCIONANTE. | 17/11/2021 | ORFEO 2021 5261884922 |
| REPITE 473-473R | JEAN CARLO SUESCUN SANABRIA SUBDIRECTOR GENERAL JURÍDICO RESPONDE A LA PERSONERÍA NO INCORPORAN FOLIOS QUE EL MEMORIAL DICE ANEXAR 20223250235961 20223250238241 | 10/02/2022 | DTDP 2022325024571 |
| REPITE 480- 480R | SEGUNDO DERECHO DE PETICIÓN SIN PREFIJO 202115261687312 NO ALLEGAN ANEXOS | 12/10/2021 | |
| REPITE 481-482 | REPITE PRIMER DERECHO DE PETICIÓN NO ALLEGAN ANEXOS PRESENTADOS | 24/09/2021 | 20215261582152.00 |
| 528-529R | SIN ANEXOS SIN ESCRITO DE TUTELA SIN RADICADO | | |
| 530-534 R | SOLICITUD DE CONCILIACIÓN RADICADO ORFEO SIN ANEXOS SIN ESCRITO DE SUBSANACIÓN | 28/01/2022 | |
| 446 - 446R | DORYS EUGENIA ÁLVAREZ FAJARDO A MARCELA ZULUAGA FRANCO SIN RADICADO. ES UN PASQUÉN. SIN RADICADO. SIN FIRMA AYN CORREO QUE LO RESPALDE | 27/04/2021 | |

PROMOTORA GERONA S.A EN LIQUIDACIÓN, a la subdirectora del IDU , quien se comprometió a hacerse parte en las mismas y a colaborar con la investigación. Este hecho no sucedió, y tampoco adjuntó al expediente las evidencias.

- Acta de la audiencia del 25 de enero de 2022, ROSITA BARRIOS FIGUEROA, con sus anexos.
- Memorial del 28 de enero de 2022, en el que ROSITA BARRIOS FIGUEROA, manifestó estar investigando pero de manera sospechosa, es con un radicado diferente.
- Memorial del 31 de enero de 2021, INVERSORA Y PROMOTORA GERONA SA EN LIQUIDACIÓN, manifiesta total desacuerdo con el falso poder que entregó ROSITA

BARRIOS el día 25 de enero de 2022, de las presuntas falsedades en las verificaciones del falso poder.

- Denuncia penal que ROSITA ESTHER BARRIOS colocó suplantando el nombre de DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA. En la Fiscalía delegada No. 91 bajo el Referido NUC. 110016000050202256528

3.4 EL IDU NO ALLEGÓ AL EXPEDIENTE LAS EVIDENCIAS DEL PAGO CON CHEQUE DE GERENCIA A VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO

EL IDU NO ENTREGÓ LOS ANEXOS QUE SON NOMBRADOS EN ALGUNOS FOLIOS QUE ENTREGÓ EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2022, ASÍ:

No entregaron el recibo de pago con la firma de la mujer llamada DORYS EUGENIA ÁLVAREZ quien dice haberse presentado para que le entregaran en cheque de gerencia la totalidad del dinero que pertenece a INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN.

No allegaron las evidencias mediante las cuales el IDU buscó al representante legal de la accionante MIGUEL ARANGO DE FEX, para verificar el desembolso mediante el cual el IDU podía entregar los dos mil trescientos sesenta y un millones trescientos ochenta y tres mil trescientos setenta y cuatro pesos (\$2.361.383.374,00) moneda corriente, propiedad de la empresa.

Por lo anterior, estimó que el juez de primera instancia no valoró el presunto “ocultamiento” de documentación que no está en el expediente, que es “inteligible” con “numeración errónea”, aseverando que:

“No sobra manifestar en esta acción de tutela que las maniobras del accionado en la respuesta no cumplen con el requisito de precisión, cuando dicen que entregan 534 folios enumerados pero en realidad hay 584 folios. 50 folios de mas que se prestan como excusa para borrar la numeración, tergiversar, intercalar, dar interpretaciones erróneas, y maniobrar el expediente.”

“(…) La sentencia no advirtió, que el expediente digital que envió el IDU es un presunto engaño al proceso, hay falta de lealtad procesal por parte del IDU.”

Igualmente, adujo que detectó como irregular y faltante en el expediente lo siguiente:

“(…)folios 494-495 del libro 2 del expediente (...) existen dos folios con la misma numeración separados por 100 folios se presta a confusión (buscar folios 361 al 363 del pdf)”

“folio 485R del libro 2 del expediente (...) existen dos folios con la misma numeración separados por 100 folios se presta a confusión (buscar folio 440 del pdf)”

“declaraciones juramentadas que hacen constar que el señor Miguel Arango de Fex no firmó el falso poder”

“(…) amputaron la pieza que debió ser agregada: la audiencia del 25 de enero de 2022 en la cual MIGUEL ARANGO DE FEX declaró a la Subdirectora del IDU que nunca firmó el pasquín presentado por la funcionaria para justificar que el representante legal de la compañía había ordenado a CARLOS ADNER VIVERO DÍAZ que lo representara en la fraudulenta audiencia de conciliación.”

“Folio 466 R del libro 2 del expediente existen 2 folios con la misma numeración separados por 100 folios, se presta a confusión, para mayor claridad, buscar folio 4402 del PDF.”

“denuncia que colocó el IDU”

“ocultamiento de los documentos enunciados, presuntamente muestra manipulación de las pruebas (...)”

“El expediente es oscuro, clandestino en dos ocasiones tiene la numeración del 450 a 499, de manera que está repetida la numeración cuando debía continuar con el 500 el foliado se devuelve a comenzar con el 450 hasta 499”

Por tanto, la impugnante solicitó revocar la decisión de primera instancia y ordenar a la accionada:

“entregar los documentos referidos en el numeral 4º del presente escrito.

Que el IDU de foliación adecuada y claridad respecto a los folios 450-499, del libro 2º, los cuales se repitieron.

le advierta al IDU, que es una entidad del Estado obligada a atender las exigencias para archivo y foliación documental de conformidad con las normas del Archivo General de la Nación.

(...) a cumplir con el mandato legal, en razón a que está obligada a entregar la totalidad de la documental solicitada, de conformidad con la ley 594 de 2000, artículo 27.”

5. CONSIDERACIONES

▪ Competencia

Este despacho es competente para conocer la impugnación presentada dentro de esta acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, al ser superior funcional del estrado judicial que profirió la decisión de primera instancia.

En el presente asunto, la inconformidad de la accionante radica en considerar que la respuesta suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU referida a la entrega del expediente, no fue completa, congruente ni clara, con imprecisiones respecto de los folios, numeración, organización y otros documentos que señala debían figurar en la actuación .

Valga precisar, que la acción de tutela tiene carácter residual y excepcional para que no se desnaturalice y termine siendo utilizada de manera indiscriminada con el fin de obtener el reconocimiento de cualquier tipo de pretensión, cuando al interior del

ordenamiento existen procedimientos y acciones para presentar las pretensiones a que haya lugar.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

“La acción de tutela fue regulada en el Artículo 86 de la Constitución Nacional como un mecanismo judicial autónomo[2], subsidiario y sumario, que le permite a los habitantes del territorio nacional acceder a una herramienta de protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por las autoridades públicas, o incluso por particulares, según lo determinado en el Artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

Para que proceda este medio privilegiado de protección se requiere que dentro del ordenamiento jurídico colombiano no exista otro medio de defensa judicial[3] que permita garantizar el amparo deprecado, o que existiendo este, se promueva para precaver un perjuicio irremediable caso en el cual procederá como mecanismo transitorio.

De esta manera, en el marco del principio de subsidiaridad, es dable afirmar que “la acción de tutela, en términos generales, no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca remplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos impuestos (dentro) de estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten”.

En ese orden, respecto al escrito de impugnación de la accionante, en cuanto a controversias propias de la jurisdicción contencioso administrativo o de carácter penal, este despacho advierte que no puede inmiscuirse en ese tipo de asuntos, ahora, la parte actora cuestiona la versión suministrada por la entidad accionada en primera instancia frente a la situación fáctica, reiterándose que esto no puede ser objeto de estudio en esta instancia constitucional, máxime que la pretensión de la acción de tutela, es la siguiente:

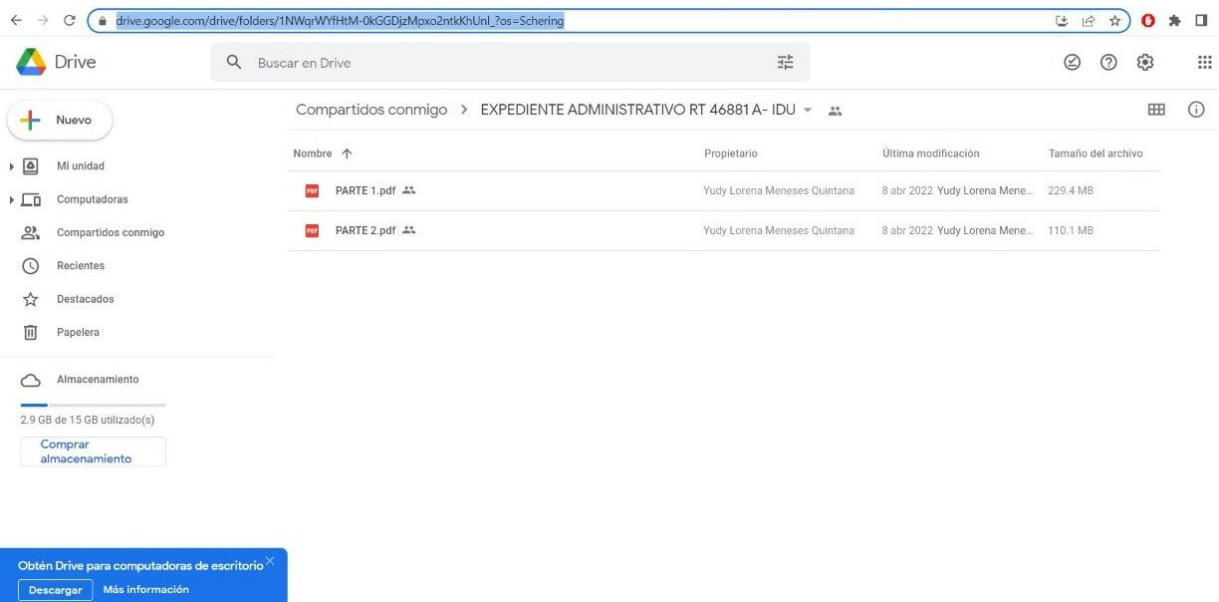
“Ordenar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, que a través, de su director Diego Sánchez Fonseca, realice todas las acciones que sean necesarias y entregue de manera inmediata a la accionante, la totalidad de la documentación que reposen el IDU, respecto a la EXPROPIACIÓN de una parte del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No.50S-40279765, en favor de la sociedad INVERSORA Y PROMOTORAGERONA S.A. –EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT 830.026.001-1, que culminó con la resolución 1246 del 27 de marzo de 2019.

Ordenar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, que se abstenga de ahora en adelante reincidir en la violación al debido proceso, perturbación a la publicidad, y defensa de la sociedad INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. –EN LIQUIDACIÓN.”

Por tanto, la discusión referida a presuntas irregularidades con ocasión de la entrega de los dineros por concepto de indemnización administrativa en el marco del proceso de expropiación del inmueble, no puede dilucidarse a través de este mecanismo constitucional y menos aún la idoneidad o autenticidad de la documentación utilizada para este fin, pues existen otros mecanismos previstos por el legislador, como la jurisdicción contencioso administrativa, además, si se estima que hubo alguna conducta punible debe interponer la respectiva denuncia, aunque en este caso según lo informó a demandante ya se encuentra en trámite una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Ahora bien, frente a la declaratoria de hecho superado objeto de inconformidad, este estrado procede a determinar si existen documentos de los cuales exista una negativa a ser entregados por parte de la entidad accionada, si el expediente compartido digitalmente adolece de orden en su foliatura o circunstancia que impide su correcta consulta, como lo afirmó la actora.

En ese orden, lo primero que se avizora es que el vínculo suministrado por la recurrente en su escrito de impugnación abre correctamente a través del enlace https://drive.google.com/drive/folders/1NWqrWYfHtMkGGDjzMpxo2ntkKhUnl_?os=Sc hering.



En segundo lugar, frente a la documentación relacionada a las denuncias impetradas por la apoderada de la sociedad ante el IDU, estas obran en los folios 391 al 415 y 436

al 445 del PDF de la segunda parte del expediente, sin que exista documento con fecha 29 de noviembre de 2021 como lo advierte la accionante.

Ahora, de manera individualizada frente a las afirmaciones de la impugnante se indicará para cada documento que:

| NUMERO DE FOLIO | CONTENIDO | FECHA | RADICADO |
|-----------------|---|-----------|----------------------|
| 445 | DE DORYS EUGENIA ALVAREZ FAJARDO RECEPCIÓN VIRTUAL ATENCIÓN AL MEMORANDO 91043 TDJ 7922356 RT 46881A ANEXOS NO LOS ENTREGARON | 4/04/2021 | ORFEO 20215260730852 |

Se encuentra en el folio 189 y 190 del PDF parte 2.

| | | | |
|------------|---|------------|---------------------|
| 465- 465 R | MEMORANDO MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO A DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO TESORERA GERONA FALTAN LOS ANEXOS IS COPIA DEL CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2021 REMITIDO POR LA SEÑORA YOLEIMA ARIAS, JEFE DE LA SECCIÓN DE AUTENTICACIONES INFORMA QUE LOS SELLOS Y FIRMAS DEL PODER OTORGADO AL SEÑOR CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, CORRESPONDEN A LA NOTARÍA SOLICITUD AL NOTARIO CUARTO DEL BOGOTÁ MEDIANTE COMUNICACIÓN IDU NO 20225050124571 CON RESPECTO A LA AUTENTICIDAD DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL DEL PODER OTORGADO POR EL SEÑOR MIGUEL GERMÁN ARANGO DE FEX AL ABOGADO CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020. MEDIANTE EL CUAL SE FACULTA AL APODERADO PARA QUE INICIE Y LLEVE A SU CULMINACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y ACUERDO CONCILIATORIO CON EL ACREEDOR EL SEÑOR VICTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO. | 18/02/2021 | DTDP 20213250035033 |
|------------|---|------------|---------------------|

Los anexos del memorando en mención se encuentran en su orden en los folios 78 al 89; 243 a 245; 221 y 222, 112 al 114 y 255 del PDF; valga mencionar, que varios de estos eran parte integral del expediente; la copia del correo electrónico del 9 de febrero de 2021 obra en el folio 215 del PDF; la solicitud al notario 4° frente a la autenticación obra a folio 211 y 212 del PDF.

| | | | |
|-----------------|--|------------|-----------------------|
| REPITE 460 460R | ORFEO RECURSO DE REPOSICION SIN NO AGREGÓ EL ESCRITO PRESENTADO POR LA ACCIONANTE. | 17/11/2021 | ORFEO 2021 5261884922 |
|-----------------|--|------------|-----------------------|

Si bien, el escrito del recurso impetrado no se encuentra anexo al expediente, lo cierto es, que el documento se encuentra en poder de la accionante y el mismo fue resuelto por la accionada, según comunicación del 27 de diciembre de 2021 que obra a folio 317 del PDF parte 2.

| | | | |
|-----------------|--|------------|--------------------|
| REPITE 473-473R | JEAN CARLO SUESCUN SANABRIA SUBDIRECTOR GENERAL JURÍDICO RESPONDE A LA PERSONERÍA NO INCORPORAN FOLIOS QUE EL MEMORIAL DICE ANEXAR 20223250235961 20223250238241 | 10/02/2022 | DTDP 2022325024371 |
|-----------------|--|------------|--------------------|

Los anexos a que se refiere la comunicación obran a folios 309 al 313, 361 al 365 y 373 y 374 del PDF parte 2 del expediente.

| | | | |
|--------------------|---|------------|-------------------|
| REPITE 480-480R | SEGUNDO DERECHO DE PETICIÓN SIN PREFIJO 20215261687312 NO ALLEGAN ANEXOS | 12/10/2021 | |
| REPITE | REPITE PRIMER DERECHO DE PETICIÓN NO ALLEGAN | 24/09/2021 | 20215261687312.00 |

Anexos que obran a folios 241, 242 y 257 del PDF parte 2.

| | | | |
|-------------------|--|------------|-------------------|
| REPITE 481-482 | REPITE PRIMER DERECHO DE PETICIÓN NO ALLEGAN ANEXOS PRESENTADOS | 24/09/2021 | 20215261682152.00 |
|-------------------|--|------------|-------------------|

Anexos obran a folios 287 al 292 y 307 del PDF parte 2.

| | | | |
|----------|---|--|--|
| 528-529R | SIN ANEXOS SIN ESCRITO DE TUTELA SIN RADICADO | | |
|----------|---|--|--|

Corresponde a la documentación allegada como prueba a esta acción constitucional, que en su mayoría constituye los documentos obrantes en el expediente administrativo y que reposan en poder de la accionante y naturalmente de este despacho.

| | | | |
|-----------|---|------------|--|
| 530-534 R | SOLICITUD DE CONCILIACIÓN RADICADO ORFEO SIN ANEXOS SIN ESCRITO DE SUBSANACIÓN | 28/01/2022 | |
|-----------|---|------------|--|

Igualmente, corresponde a la actuación propiamente dicha dentro del expediente administrativo, esto es, derechos de petición, respuestas, resoluciones emitidas con ocasión a la expropiación, además, son documentos que la misma accionante allegó.

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 446 - 446R | DORYS EUGENIA ÁLVAREZ FAJARDO A MARCELA ZULUAGA FRANCO SIN RADICADO. ES UN PASQUÍN. SIN RADICADO. SIN FIRMA AYN CORREO QUE LO RESPALDE | 27/04/2021 | |
|------------|--|------------|--|

El documento obra a folios 187 y 188 del PDF parte 2; donde las calificaciones que otorgó la accionante no se deben debatirse en este escenario judicial.

3.4 EL IDU NO ALLEGÓ AL EXPEDIENTE LAS EVIDENCIAS DEL PAGO CON CHEQUE DE GERENCIA A VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO

Obra en los folios 229 y 231 del PDF parte 2.

No entregaron el recibo de pago con la firma de la mujer llamada DORYS EUGENIA ÁLVAREZ quien dice haberse presentado para que le entregaran en cheque de gerencia la totalidad del dinero que pertenece a INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN.

No allegaron las evidencias mediante las cuales el IDU buscó al representante legal de la accionante MIGUEL ARANGO DE FEX, para verificar el desembolso mediante el cual el IDU podía entregar los dos mil trescientos sesenta y un millones trescientos ochenta y tres mil trescientos setenta y cuatro pesos (\$2.361.383.374,00) moneda corriente, propiedad de la empresa.

Entonces, se trata de documentación de la que no se acreditó su existencia, pues a folio 229 del PDF parte 2 se observan los datos de la transacción adelantada al respecto en el Banco Agrario de Colombia y el IDU ha indicado a la accionante a través de varias respuestas a sus múltiples peticiones el trámite que impartió a la solicitud de pago en cuestión, sin que se hubiese mencionado una búsqueda al “*representante legal de la accionante MIGUEL ARANGO DE FEX*”.

5. Memorial del 31 de enero de 2021, INVERSORA Y PROMOTORA GERONA SA EN LIQUIDACIÓN, manifiesta total desacuerdo con el falso poder que entregó ROSITA

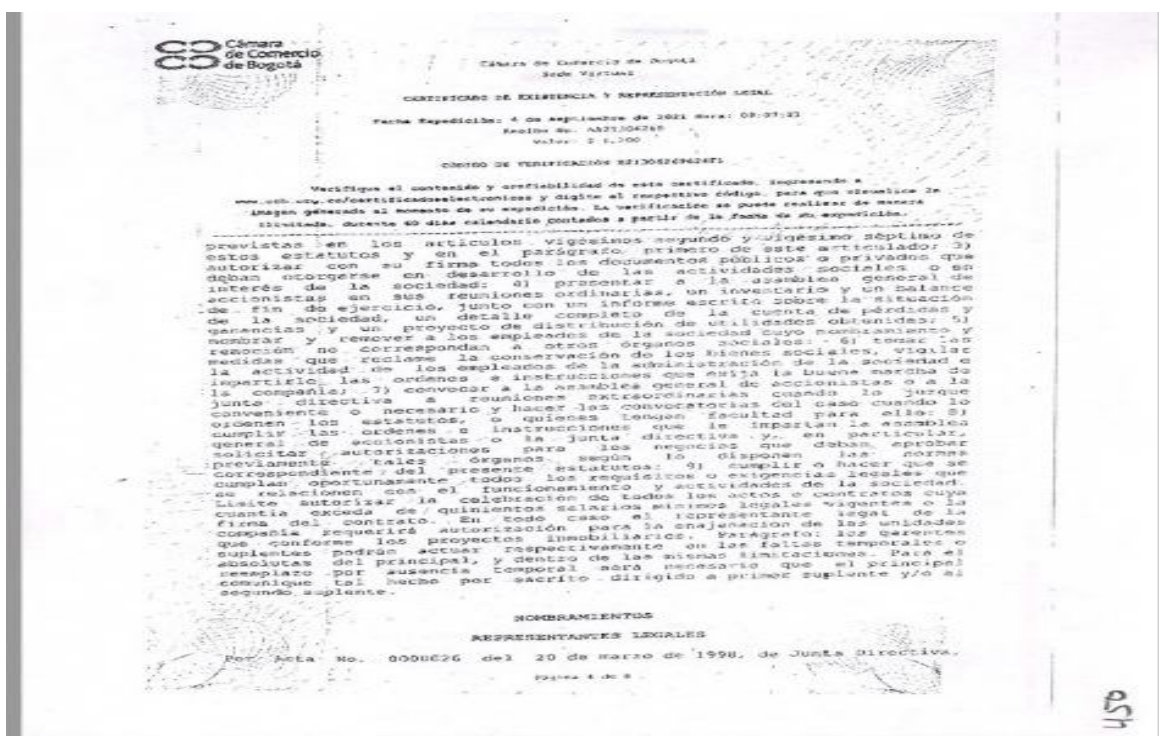
No acreditó la accionante que exista un memorial de fecha 31 de enero de 2021 y verificada la actuación no se acreditó siquiera sumariamente que se encuentre faltante.

3. Acta de la audiencia del 25 de enero de 2022, ROSITA BARRIOS FIGUEROA, con sus anexos.
4. Memorial del 28 de enero de 2022, en el que ROSITA BARRIOS FIGUEROA, manifestó estar investigando pero de manera sospechosa, es con un radicado diferente.
6. Denuncia penal que ROSITA ESTHER BARRIOS colocó suplantando el nombre de DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA. En la Fiscalía delegada No. 91 bajo el Referido NUC. 110016000050202256528

Estos últimos tres documentos, si bien no obran en el expediente digital que trasladó el IDU a la accionante con ocasión a la petición elevó, lo cierto es, que tanto el acta de la audiencia del 25 de enero de 2022 como el memorial del 28 de enero de 2022, se encuentran en su poder al punto que los allegó como anexo a la acción de tutela.

En ese contexto, como lo consideró el *a quo* la petición fue respondida, toda vez que se compartió el expediente digital solicitado, sin que pueda aseverarse que existe una negativa o actividad arbitraria al respecto de parte del IDU; adviértase que si a la accionante esta interesada acceder a la copia de la denuncia penal que señala e interpuso por parte de la señora Rosita Esther Barrios, podrá acudir a la Fiscalía General de la Nación para obtenerla, pues el expediente administrativo se encuentra conformado con las actuaciones propias de este, como se verificó por el juzgado.

Ahora, en lo que se refiere a las presuntas imprecisiones en la foliatura del expediente compartido de manera digital, se observa que en la segunda parte del folio 499 se pasa al 450, generando repetición desde ese número hasta el 499 nuevamente, los cuales obran en la página 293 y siguientes del PDF parte 2; donde es evidente que existe imprecisión frente a esto, es decir, un error en la foliatura, más no hay prueba que corresponda a un ocultamiento de documentos, al punto que como se denota a continuación es una repetición en la enumeración pero no folios faltantes, veamos:



Por lo anterior, se comparte las consideraciones del a-quo cuando señaló que, “(...) Aunado a ello, debe puntualizarse que, se escapa del control de este juez constitucional que la totalidad de las copias entregadas no esté foliada de manera correcta, que se haya hecho con lápiz, que no se haya ordenado cronológicamente o que se hayan sustraído u ocultado piezas procesales, porque si de ello advierte irregularidad alguna la parte accionante, será ante la Fiscalía General de la Nación, que deberá ponerlo en conocimiento dentro de la misma investigación que se adelanta por los hechos que dieron origen al presente trámite de tutela o en su defecto ponerlo en conocimiento ante los entes disciplinarios correspondientes para que adopten las decisiones del caso, como la Personería Distrital y/o Procuraduría General de la Nación.”

Por último, las denuncias de presuntos actos contrarios al ordenamiento jurídico señalados en la acción de tutela y en sede de impugnación, deberá instaurar las respectivas acciones ante las autoridades competentes, pues como se ha advertido la acción de tutela no es el escenario para debatirlas.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO TREINTA Y TRES (33) PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida el veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022) por el Juzgado 32° Penal Municipal con Función de Conocimiento de esta ciudad, conforme a las razones contenidas en esta sentencia.

SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a las partes y al juzgado de primera instancia.

TERCERO: REMITIR de manera inmediata la actuación a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

El Juez,



FERNANDO GONZÁLEZ OLAVE